RECUPERAR LO QUE IMPORTA

Documento de trabajo

Propuestas para Recuperar lo que importa

PSPV
PSOE

Conferencia Política
Alicante
19 y 20 de septiembre

Introducción

La Comunitat Valenciana afronta una etapa decisiva. Los próximos meses no pueden entenderse solo como la preparación de unas elecciones, sino como el inicio de un proceso de reconstrucción política, institucional y social. Después de un tiempo marcado por el deterioro de los servicios públicos, la falta de respuesta ante problemas urgentes, la subordinación del Partido Popular a los planteamientos de Vox y una gestión incapaz de ofrecer seguridad y confianza, el PSPV-PSOE tiene la responsabilidad de ordenar una alternativa útil para la mayoría social valenciana.

La Conferencia Política forma parte de ese proceso. No nace de una reflexión improvisada ni de un documento elaborado al margen de la sociedad valenciana. Viene precedida de numerosas jornadas sectoriales, encuentros de trabajo y espacios de diálogo en los que el PSPV-PSOE ha escuchado a representantes de la sociedad civil, profesionales, entidades sociales, organizaciones sectoriales, responsables institucionales, personas expertas y colectivos directamente afectados por las políticas públicas.

Durante los últimos meses se ha hablado de sanidad, salud mental, educación, universidad, ciencia, vivienda, derechos sociales, feminismo, modelo productivo, territorio, juventud, cultura, igualdad y respuesta ante las emergencias. Cada una de esas jornadas ha permitido recoger preocupaciones, diagnósticos, propuestas y experiencias concretas. También ha permitido constatar algo fundamental. La sociedad valenciana no está resignada. Hay malestar, pero también hay voluntad de participar. Hay crítica, pero también hay propuestas. Hay cansancio ante la mala gestión, pero también una demanda clara de seriedad, escucha y alternativa.

La política democrática necesita recuperar esa relación con la sociedad. Un partido que aspira a gobernar no puede limitarse a hablarse a sí mismo. Debe escuchar antes de proponer, contrastar antes de decidir y construir con quienes conocen de primera mano los problemas. Esa escucha no sustituye la responsabilidad política, pero la hace más sólida. Gobernar exige criterio, dirección y capacidad de decisión, pero también exige conocer la realidad sobre la que se quiere actuar.

Desde esa escucha activa se elabora este documento marco de la Conferencia Política del PSPV-PSOE. Su finalidad no es cerrar definitivamente el programa de gobierno, sino fijar una orientación política, ordenar las prioridades y abrir un debate estructurado sobre la Comunitat Valenciana que queremos construir. A partir de este marco, de las aportaciones que se recojan en la propia Conferencia y del trabajo posterior de las distintas áreas, deberán concretarse los compromisos socialistas para el programa de gobierno con el que el PSPV-PSOE concurrirá a las elecciones autonómicas de 2027.

Esa alternativa no puede limitarse a una suma de medidas sectoriales. Debe partir de una idea clara de país, de una forma de entender la vida en común y de una respuesta solvente a los grandes problemas que hoy condicionan la vida cotidiana de la ciudadanía.

La política valenciana necesita recuperar seriedad, capacidad de gobierno, ambición transformadora y cercanía con la realidad de los pueblos, barrios, ciudades y comarcas de la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana necesita un gobierno que cuide, que planifique, que escuche y que actúe. Un gobierno que no utilice las instituciones para dividir, sino para proteger y unir. Un gobierno que no convierta los servicios públicos en una oportunidad de negocio para una minoría, sino en la garantía compartida de una vida digna. Un gobierno que no niegue los retos climáticos, sociales y económicos, sino que los afronte con ciencia, prevención y sentido de futuro. Un gobierno que no enfrente territorios, lenguas, generaciones o formas de vida, sino que sea capaz de construir una identidad valenciana abierta, plural y cohesionada.

La derecha valenciana ha demostrado en demasiado poco tiempo que no tiene un proyecto de futuro para la Comunitat Valenciana. Tiene una forma de ocupar el poder, pero no una idea de país. Su alianza con Vox ha arrastrado a las instituciones hacia posiciones más regresivas en igualdad, memoria democrática, convivencia, lengua, cultura, derechos sociales y respuesta climática.

Su política fiscal tiene una prioridad evidente. Rebajar impuestos a las rentas más altas y presentar después pequeñas rebajas generalizadas como si fueran un alivio real para la mayoría social. Es una doble operación de privilegio y propaganda. Beneficia de manera clara a quienes menos necesitan ayuda e intenta convencer al conjunto de la ciudadanía de que el beneficio alcanza a toda la sociedad, cuando en realidad se debilitan los recursos necesarios para sostener la sanidad, la educación, la dependencia, la vivienda y los servicios públicos. Esa forma de gobernar no es neutral. Cada euro que se perdona a quienes más tienen acaba faltando allí donde más falta hace. Y cuando llegan los problemas de verdad, cuando hay que planificar, cuidar, prevenir y dar la cara, se comprueba que detrás de tanta propaganda no había un gobierno preparado para proteger a la gente.

Frente a esa forma de entender la política, el PSPV-PSOE debe ofrecer una alternativa reconocible. Una alternativa que no se limite a corregir los errores del actual gobierno, sino que proponga una orientación de fondo para la Comunitat Valenciana de la próxima década. El objetivo no puede ser volver simplemente al punto en el que estábamos. Debe ser avanzar hacia una Comunitat más justa, más segura, más preparada, más cohesionada y más consciente de sus posibilidades.

La Comunitat Valenciana tiene recursos, talento y capacidad para ocupar un lugar mucho más relevante en España y en Europa. Tiene universidades, centros de investigación, industria, agricultura, comercio, turismo, cultura, creatividad, tejido empresarial, pueblos vivos, ciudades dinámicas y una ciudadanía que ha demostrado una enorme fuerza solidaria en los momentos más difíciles. Pero todo ese potencial necesita un gobierno que lo acompañe, lo ordene y lo impulse. La falta de buen gobierno no es un problema abstracto. Se nota en las listas de espera, en las aulas, en la vivienda, en la atención a la dependencia, en la gestión de las emergencias, en el transporte público, en la relación con los municipios y en la vida diaria de la gente.

La primera obligación de un gobierno decente es proteger la vida de las personas. Por eso la sanidad pública, los cuidados y el bienestar deben volver al centro de la acción política. La atención primaria, la salud mental, la dependencia, la atención a las personas mayores, la soledad no deseada, la discapacidad, la infancia vulnerable y los servicios sociales no pueden tratarse como asuntos secundarios. Una sociedad avanzada se reconoce por la seguridad y accesibilidad que ofrece a todas las personas cuando llega la enfermedad, la fragilidad, la pérdida de autonomía o la dificultad.

También es imprescindible recuperar el derecho a vivir aquí. La vivienda se ha convertido en uno de los grandes obstáculos para la libertad real de la juventud y de muchas familias trabajadoras. El precio del alquiler, la dificultad de emanciparse, la pérdida de servicios en algunos municipios, la falta de transporte adecuado y la desigualdad entre barrios y comarcas están limitando demasiados proyectos de vida. Una Comunitat Valenciana justa debe permitir que la gente joven pueda construir su futuro en su tierra, que las familias puedan seguir viviendo en sus barrios y que ningún pueblo ni ninguna comarca se sienta abandonada por su gobierno.

La prosperidad valenciana tampoco puede apoyarse en salarios bajos, precariedad o modelos económicos de corto plazo. La Comunitat Valenciana necesita una economía más fuerte, más justa y más preparada para el futuro. Eso exige apoyar a las buenas empresas, fortalecer la industria, acompañar a pymes y al trabajo autónomo, modernizar el comercio, impulsar la agricultura, la pesca y el turismo sostenible, conectar la Formación Profesional, las universidades, la ciencia y la innovación con el tejido productivo, y crear más valor para repartirlo mejor. El progreso económico solo merece ese nombre cuando mejora la vida de la mayoría y permite vivir dignamente del trabajo.

La DANA ha marcado un antes y un después en la Comunitat Valenciana. La reconstrucción, la prevención, las emergencias, la adaptación al cambio climático, la gestión del agua, la protección del litoral, la ordenación del territorio y las infraestructuras resilientes no pueden tratarse como asuntos técnicos separados de la política. Son condiciones básicas de seguridad, confianza y futuro. Un gobierno responsable no espera a que llegue la tragedia para hacerse presente. Planifica, previene, coordina, protege y acompaña.

La educación debe ocupar un lugar central en la nueva etapa valenciana. La escuela pública, la inclusión, la equidad, la convivencia, la coeducación, el reconocimiento del profesorado, la educación infantil, la orientación, la Formación Profesional, las universidades y la formación permanente forman parte de una misma convicción. Ninguna sociedad puede ser libre si no garantiza a la infancia y la juventud la posibilidad real de aprender, crecer y desarrollar su talento. La educación no es solo una política sectorial. Es el principal instrumento de igualdad, libertad y cohesión social.

El feminismo debe seguir siendo una seña de identidad del proyecto socialista valenciano. La igualdad entre mujeres y hombres no puede depender del clima político de cada momento ni retroceder por la presión de quienes niegan las discriminaciones que todavía existen.

Una Comunitat Valenciana democrática debe combatir la violencia machista, la brecha salarial, la desigual distribución de los cuidados, las dificultades de conciliación y todos los obstáculos que limitan la libertad de las mujeres. El feminismo no divide a la sociedad. La hace más justa, más libre y más democrática.

La defensa de los derechos y de la convivencia debe formularse desde una idea amplia de ciudadanía. Ninguna persona debe ser discriminada por su origen, sus creencias, su lengua, su orientación sexual, su identidad, su discapacidad, su situación económica o su forma de vida. La Comunitat Valenciana debe ser una tierra donde todas las personas puedan vivir con respeto, seguridad y libertad, dentro de un marco común de derechos y responsabilidades. Frente a quienes convierten la diversidad en un motivo de enfrentamiento, el PSPV-PSOE debe defender una convivencia serena, firme y respetuosa con la dignidad de cada persona.

La lengua y la cultura valencianas deben ser también parte esencial de ese proyecto común. El valenciano debe defenderse desde el prestigio, el afecto y la convivencia, no desde la imposición ni desde el conflicto. La Comunitat Valenciana es una tierra con una riqueza cultural enorme, hecha de música, fiestas, patrimonio, creación, literatura, tradiciones, modernidad y pluralidad lingüística. Defender lo propio no significa excluir a nadie. Significa cuidar una herencia compartida y proyectarla hacia el futuro con orgullo y naturalidad.

El autogobierno y la financiación justa deben entenderse como herramientas para mejorar la vida de la gente. No son una cuestión abstracta ni una reivindicación retórica. Sin recursos suficientes no hay sanidad digna, educación de calidad, políticas de vivienda, atención a la dependencia, transporte público, servicios sociales ni infraestructuras adecuadas. La Comunitat Valenciana debe hablar con voz propia, cooperar con lealtad y exigir respeto. Defender los intereses valencianos es defender derechos concretos para más de cinco millones de personas, con independencia de su origen o de su situación económica.

La alternativa socialista debe construirse desde la vida real. Desde la persona que espera una cita médica. Desde la familia que no encuentra una vivienda asequible. Desde quien quiere quedarse en su tierra. Desde la trabajadora que no llega a fin de mes. Desde la empresa que quiere innovar y necesita estabilidad. Desde quien trabaja el campo y vive pendiente del agua y del clima. Desde el pueblo que reclama transporte. Desde el profesorado que sostiene cada día la educación pública. Desde las mujeres que exigen igualdad efectiva. Desde quienes quieren vivir en una tierra abierta, plural, culta y orgullosa. Desde quien cuida y quien necesita cuidados.

El objetivo es abrir una nueva etapa que devuelva a las instituciones valencianas la decencia, la eficacia y la sensibilidad social, y que vuelva a poner la vida de las personas en el centro. La Comunitat Valenciana tiene fuerza, talento y futuro. Convertir vivir mejor, quedarse, prosperar, sentirse protegido y avanzar con orgullo compartido en objetivos reales de gobierno exige recuperar la confianza, ordenar el proyecto y actuar con responsabilidad.

BLOQUE 1. VIVIR BIEN
UNA NUEVA POLÍTICA DEL BIENESTAR QUE DEFIENDA LO PÚBLICO
Sanidad, salud mental, cuidados y bienestar

La Comunitat Valenciana necesita recuperar la idea de una sociedad del bienestar como eje de las políticas públicas. Esa ha sido la base que ha guiado a los diferentes gobiernos socialistas, ofreciendo seguridad ante situaciones de debilidad. Las personas necesitan instituciones fuertes y políticas que las sitúen en el centro en todas las etapas de la vida: cuando enferman, envejecen, necesitan cuidados, se encuentran en situación de dependencia, sufren problemas de salud mental, viven con una discapacidad o atraviesan una situación de vulnerabilidad.

Hablamos de una sanidad pública de calidad, de la importancia de la salud mental, de los cuidados, de los servicios sociales como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, de facilitar la vida cuando hay una discapacidad, de proteger a la infancia o de atender a las personas mayores y de apostar por la prevención. En realidad, hablamos de algo más profundo. Hablamos del derecho a vivir con dignidad.

Vivir bien no significa vivir con privilegios, sino vivir con derechos y contar con políticas públicas que protejan a todas las personas. Significa saber que, si llega la enfermedad, la sanidad pública responde. Significa que una persona mayor no queda sola cuando pierde autonomía. Significa que una familia no tiene que enfrentarse a un laberinto burocrático para recibir una prestación de dependencia. Significa que una persona joven puede acceder a atención psicológica cuando la necesita. Significa que una persona con discapacidad dispone de apoyos reales para desarrollar su vida. Significa que los servicios sociales no llegan tarde ni son caridad, sino derechos que acompañan, previenen y protegen.

La sanidad pública es una de las mayores conquistas democráticas de nuestro país. En un sistema público fuerte, la atención no depende del dinero, del estatus social, de disponer o no de seguro privado ni del lugar donde se vive. Se atiende a las personas porque tienen derecho a ser atendidas. Y esa es la clave: el derecho. Por eso la Comunitat Valenciana no puede volver a caminar hacia modelos que convierten la salud en un espacio de negocio. La colaboración complementaria puede existir cuando sea necesaria, transparente, eficiente y subordinada al interés general, pero nunca como sustitución del sistema público ni como excusa para debilitarlo.

La sociedad valenciana conoce las consecuencias de la privatización sanitaria porque ya las ha sufrido por los gobiernos de la derecha. Durante años se intentó presentar como una fórmula moderna y eficiente, pero la experiencia demostró que un servicio esencial no puede quedar condicionado por contratos, concesiones y cuentas de resultados. La prioridad son las personas y su salud, no el margen empresarial. La reversión de hospitales privatizados, como Alzira, Torrevieja, Dénia y Manises, fue una decisión política de fondo. Significó recuperar capacidad pública, devolver al sistema valenciano de salud lo que nunca debió salir de él y demostrar que la salud no puede quedar sometida a la lógica de la rentabilidad.

Defender la sanidad pública exige impedir que se deteriore para justificar su posterior externalización. Exige una planificación eficiente, el refuerzo de las plantillas y la modernización de hospitales, centros de salud y tecnología, junto con más investigación, prevención y capacidad propia del sistema valenciano de salud. Exige también una idea clara: nunca más la sanidad valenciana puede volver a ser utilizada como laboratorio de negocio privado. La salud debe ser una garantía pública, universal y de calidad.

La atención primaria debe volver a ser el primer espacio de confianza de la ciudadanía. Es el lugar donde mejor se conoce y se sigue a las personas, las familias, los barrios y los pueblos. Cuando funciona, previene, acompaña, detecta y resuelve antes los problemas, evita ingresos innecesarios y humaniza la atención sanitaria. Cuando se debilita, todo el sistema se resiente. Las demoras, la falta de tiempo en consulta, la sobrecarga de los equipos y la dificultad para acceder a la medicina de familia deterioran la confianza ciudadana y desgastan al personal sanitario.

Las listas de espera no son una estadística. Son una realidad que genera dolor, incertidumbre, ansiedad familiar, pérdida de calidad de vida y, en demasiadas ocasiones, agravamiento de problemas que podrían haberse atendido antes, con la consiguiente sobrecarga y deterioro del sistema. Reducirlas exige transparencia, planificación y más capacidad pública. No basta con maquillar datos ni con trasladar demoras de un circuito a otro. La ciudadanía tiene derecho a conocer la situación real y a confiar en que existe una estrategia seria para mejorar los tiempos de atención.

La salud mental debe dejar de ser una promesa aplazada. El sufrimiento emocional atraviesa hoy a muchas familias, especialmente a la infancia, a la adolescencia y a la juventud, pero también a personas mayores, personal sometido a presión, personas que viven en soledad, familias afectadas por emergencias y personas y colectivos en situaciones de especial vulnerabilidad. La respuesta pública no puede ser tardía, fragmentada o insuficiente. Hace falta prevención, atención temprana, equipos profesionales suficientes, coordinación con educación y servicios sociales, apoyo comunitario, una mirada libre de estigmas y un enfoque multidisciplinar.

La salud mental debe salir definitivamente de los márgenes del sistema. Una sociedad que no atiende a tiempo el sufrimiento emocional termina pagando un coste humano, familiar y social enorme. La ansiedad, la depresión, las autolesiones, los trastornos de conducta alimentaria, las adicciones, el duelo, el trauma, el acoso y el riesgo suicida no pueden tratarse como asuntos privados que cada familia resuelve como puede. La salud mental es salud pública. Y debe tener respuesta pública, cercana, estable y digna.

La dependencia y los cuidados son uno de los grandes retos de esta década. El aumento de la esperanza de vida es una buena noticia, pero conlleva nuevas necesidades y retos que exigen nuevas respuestas públicas. Cada vez hay más personas que necesitan apoyos, más familias que organizan su vida alrededor de los cuidados y más mujeres que siguen asumiendo una carga desigual, con consecuencias para su vida personal y laboral y para su salud mental. La dependencia no puede convertirse en una carrera de obstáculos.

Quien necesita ayuda no puede esperar indefinidamente. Quien cuida no puede quedar solo. Y quien envejece debe poder hacerlo con autonomía, seguridad, vínculos y dignidad.

Las políticas avanzadas de cuidados deben garantizar más autonomía y respeto a las decisiones individuales y combinar atención domiciliaria, centros de día, residencias dignas, apoyo a familias cuidadoras, coordinación sociosanitaria y servicios de proximidad. También deben incorporar una mirada nueva sobre la longevidad. Las personas mayores no son solo personas dependientes o frágiles. Muchas quieren seguir participando, aprendiendo, aportando, cuidando, creando comunidad y formando parte activa de la vida social. Las administraciones deben facilitar que la transición desde la vida laboral permita mantener esa participación activa de forma natural. Vivir más años debe significar vivir con más derechos, más autonomía y más capacidad de decidir.

La discapacidad debe abordarse desde la inclusión social en todos los ámbitos y desde el derecho a una vida autónoma, lo que exige accesibilidad universal y apoyos suficientes. Una sociedad justa no mide a las personas por sus limitaciones, sino por su derecho a participar plenamente en la vida social, educativa, laboral y comunitaria. Eso exige reducir las listas de espera en el reconocimiento de la discapacidad, reforzar la atención temprana, apoyar a las familias, mejorar la accesibilidad, coordinar recursos y contar con las personas con discapacidad y sus entidades en la definición de las políticas que les afectan.

Los servicios sociales deben consolidarse como un pilar ordinario del Estado del bienestar. No pueden ser vistos como una red de último recurso ni como una respuesta asistencial para situaciones extremas. Son derechos de ciudadanía y deben abordarse como tales. Deben actuar desde la proximidad, la prevención y la intervención comunitaria. Unos servicios sociales fuertes detectan antes la pobreza infantil, acompañan a las familias, previenen la exclusión, protegen frente a la violencia, orientan ante la dependencia, apoyan a las personas con discapacidad y coordinan recursos para que nadie quede fuera.

El bienestar también exige una mirada territorial. No es lo mismo vivir en una gran ciudad que en una comarca de interior, en una zona turística con población estacional, en un barrio vulnerable o en un municipio pequeño con dificultades de transporte. La planificación sanitaria y social debe tener en cuenta la demografía, el envejecimiento, los cambios de población, la dispersión territorial y las necesidades específicas de cada comarca. La igualdad no consiste en dar la misma respuesta a realidades distintas, sino en garantizar que todas las personas reciban la atención que necesitan vivan donde vivan.

El actual gobierno del PP, condicionado por Vox no ha ofrecido una respuesta a la altura. Ha confundido gestión sanitaria con propaganda, ha normalizado las demoras, ha debilitado la confianza del personal sanitario y social y ha tratado la sanidad, la dependencia y los servicios sociales como problemas administrativos, no como garantías de vida digna. La derecha habla de libertad mientras empuja a muchas familias a buscar soluciones privadas cuando falla lo común. Habla de eficiencia mientras deteriora lo público. Habla de responsabilidad mientras no escucha a quienes sostienen cada día hospitales, centros de salud, servicios sociales, residencias, atención domiciliaria y recursos comunitarios.

Ese es el contraste de fondo. Para el PSPV-PSOE, la sanidad, los cuidados, la salud mental, la dependencia y los servicios sociales no son una carga. Son derechos que conforman la base de una sociedad más segura, más cohesionada y libre. Sin ellos, la libertad depende del bolsillo de cada familia. Con ellos, la libertad se convierte en una posibilidad real para todas las personas.

La Comunitat Valenciana necesita recuperar la confianza en sus servicios públicos. Esa confianza no se logra con anuncios. Se construye con inversión y decisiones políticas y se concreta cuando la cita llega a tiempo, la dependencia se resuelve sin desesperación, la salud mental recibe respuesta, la persona mayor no se siente abandonada, una familia vulnerable encuentra apoyo, una persona con discapacidad accede a sus derechos, el personal se siente respetado y la ciudadanía percibe que las instituciones vuelven a cuidar.

Compromisos para vivir con dignidad
Nuestro compromiso con la sanidad pública

El PSPV-PSOE se compromete a recuperar la confianza en la universalidad y la capacidad de respuesta del sistema sanitario valenciano, resolviendo los problemas con calidad y sin demoras evitables. La salud no puede depender del seguro privado, del lugar donde se vive ni de la capacidad económica de cada familia. La Comunitat Valenciana debe cerrar definitivamente la puerta a la privatización de la sanidad pública y orientar todos los esfuerzos a fortalecer su capacidad propia.

La Generalitat reforzará hospitales públicos, centros de salud, plantillas, tecnología sanitaria, investigación, pruebas diagnósticas, cirugía programada, atención hospitalaria y continuidad asistencial contando con herramientas tecnológicas que serán fundamentales. También deberá revisar con transparencia los espacios de externalización existentes para garantizar que el interés general, la calidad asistencial y el control público estén siempre por encima de cualquier lógica de negocio.

La sanidad pública valenciana debe ser universal, cercana, innovadora y humana. Universal porque debe atender a todas las personas sin discriminación por su origen, su situación económica o cualquier otra circunstancia personal o social. Cercana porque debe llegar a cada barrio, pueblo y comarca. Innovadora porque debe incorporar con equidad la medicina de precisión, las terapias avanzadas, los nuevos cribados, la digitalización útil y la investigación sanitaria. Humana porque la persona enferma no puede convertirse en un expediente, una demora o un número en una lista.

Nuestro compromiso con la atención primaria

El PSPV-PSOE se compromete a situar la atención primaria como clave de bóveda del sistema sanitario. Es el lugar donde se resuelve la mayoría de los problemas de salud, se detectan los problemas graves, se atienden las enfermedades crónicas y los equipos profesionales acompañan a las familias a lo largo de la vida. La atención primaria debe recuperar tiempo, cercanía, continuidad asistencial, capacidad preventiva, atención domiciliaria, trabajo comunitario y capacidad resolutiva. Una sanidad pública fuerte empieza por una atención primaria humanizada, integral, resolutiva y accesible.

La Generalitat debe avanzar hacia el objetivo de destinar el 25 por ciento del presupuesto sanitario a la atención primaria, con una planificación progresiva, evaluable y vinculada a mejoras reales. Ese esfuerzo debe traducirse en refuerzo de personal, mejores condiciones de trabajo, más tiempo de consulta, menos burocracia, equipos estables, nuevas prestaciones, mayor capacidad de resolución, mejor coordinación con los hospitales y una relación más directa con salud pública. También debe mejorar la coordinación entre lo sanitario y lo social, las residencias, las farmacias comunitarias y los municipios.

Los centros de salud deben volver a ser el espacio de confianza de la ciudadanía y deben tener mayor capacidad de autogestión. Para ello hay que reforzar los equipos: medicina y enfermería familiar y comunitaria, pediatría, matronas, fisioterapia, trabajo social sanitario, salud comunitaria, salud bucodental, atención domiciliaria y prevención. El objetivo no es solo atender más. Es atender mejor y antes.

Para ello, implantaremos equipos de salud más estables y multidisciplinares, incorporando nuevos perfiles profesionales (enfermería especializada, fisioterapia, nutrición, podología, entre otros). Aseguraremos que la población infantil disponga de pediatría y enfermería pediátrica de referencia.

Nuestro compromiso con las listas de espera

El PSPV-PSOE se compromete a reducir de manera real las listas de espera sanitarias. No podemos permitir que se maquillen cifras ni se trasladen pacientes de un circuito a otro. Apostamos por la transparencia total, en tiempo real, de todo el sistema. Se trata de conocer la situación con rigor, actuar sobre las causas, reforzar la actividad ordinaria del sistema público y ofrecer a la ciudadanía información clara sobre sus tiempos de atención.

La Generalitat aprobará un plan de acción de alto impacto, público, transparente y evaluable para reducir demoras en consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Ese plan debe apoyarse en una mayor actividad en los centros públicos, mejor organización, refuerzo de plantillas, uso eficiente de quirófanos y tecnología, coordinación entre departamentos y criterios claros de prioridad clínica.

La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto espera, por qué espera y qué está haciendo su gobierno para resolverlo. La transparencia no puede ser una amenaza para la administración. Debe ser una herramienta de confianza.

Nuestro compromiso con el personal sanitario y social

El PSPV-PSOE se compromete a cuidar a quienes cuidan. No habrá buena sanidad, buena salud mental, buena dependencia ni buenos servicios sociales sin reconocimiento, escucha y respeto hacia sus profesionales. Quienes trabajan en medicina, enfermería, psicología, trabajo social, cuidados auxiliares, terapias, dependencia, atención domiciliaria, educación y administración, junto con muchas otras personas, sostienen cada día el bienestar de la ciudadanía.

La Generalitat debe impulsar una planificación rigurosa de recursos humanos que permita reforzar plantillas, estabilizar equipos, reducir temporalidad, mejorar condiciones laborales, retener talento, atraer profesionales en especialidades deficitarias, ampliar la formación especializada y reconocer la carrera profesional. La sobrecarga permanente no puede convertirse en la forma normal de funcionamiento del sistema.

También hay que garantizar la participación profesional en la toma de decisiones. Quienes conocen el sistema desde dentro deben formar parte de las soluciones. Escuchar al personal no es una concesión. Es una garantía de buen gobierno y de avance en la resolución de problemas.

Nuestro compromiso con la salud mental

El PSPV-PSOE se compromete a situar la salud mental en el centro de la agenda pública. El malestar emocional y muchos problemas de salud mental están relacionados también con la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, la pobreza, la violencia, la soledad o la falta de redes de apoyo. Por eso la respuesta sanitaria debe coordinarse con políticas sociales, educativas, laborales y comunitarias.

Necesitamos una política integral de salud mental que combine atención clínica de calidad, prevención, acompañamiento comunitario, rehabilitación y acción sobre los determinantes sociales.

La Comunitat Valenciana necesita una estrategia de salud mental comunitaria y de prescripción social desde la atención primaria, con recursos comunitarios de apoyo, unidades de salud mental comunitaria y espacios estables de atención temprana y acompañamiento psicológico. Esta red debe contar, al menos, con un recurso de referencia por área sanitaria, reforzar los equipos profesionales y garantizar una respuesta más rápida, especialmente para la infancia, la adolescencia y la juventud.

La Generalitat deberá ampliar los equipos especializados de infancia y adolescencia, incorporar más profesionales de la psicología y especialistas en psicoterapia, trauma y prevención del suicidio, y reforzar la coordinación entre sanidad, educación y servicios sociales. Necesitamos canales de coordinación ágiles para detectar situaciones de riesgo, acoso, duelo, ansiedad, desprotección, violencia o sufrimiento emocional.

Recuperaremos el Plan de prevención del suicidio y manejo de conducta suicida, que fue pionero en España y que contará con mejores sistemas de detección precoz, equipos de intervención rápida, seguimiento de los casos y apoyo a las familias.

La prevención del suicidio, la atención al acoso, la intervención ante autolesiones, la ansiedad, los trastornos alimentarios, las adicciones y el duelo deben tener circuitos claros, equipos suficientes y acompañamiento cercano. Impulsaremos un programa de investigación en salud mental en colaboración con las universidades y centros de investigación.

También debe prestarse una atención específica a los municipios afectados por la DANA, donde el impacto emocional y comunitario exige recursos extraordinarios y sostenidos.

La salud mental debe formar parte de manera normalizada, accesible y digna del sistema público. Por ello resulta inaplazable la integración de la salud mental y los servicios sociales, consiguiendo una coordinación efectiva entre ambos sistemas, especialmente en personas en situación de vulnerabilidad y para las personas que padecen trastorno mental grave.

Nuestro compromiso con la dependencia y los cuidados

El PSPV-PSOE se compromete a construir un verdadero sistema valenciano de cuidados. La dependencia, la atención domiciliaria, los centros de día, las residencias, el apoyo a las familias cuidadoras y la coordinación sociosanitaria deben abordarse desde una política integral. Las personas no pueden esperar durante meses o años una respuesta que necesitan ya.

La Generalitat debe simplificar trámites, mejorar la valoración, reforzar equipos, reducir listas de espera y garantizar que las prestaciones y servicios lleguen a tiempo a través de la incorporación de tecnología, una mejor organización, gestión y refuerzo de equipos. La dependencia debe dejar de ser un laberinto burocrático para convertirse en un derecho efectivo. Cada expediente representa una persona, una familia, una situación de fragilidad y una necesidad que no puede quedar aparcada ni atrapada en la maraña burocrática.

Ese sistema valenciano de cuidados debe reconocer también a quienes cuidan. Muchas familias sostienen cada día situaciones muy difíciles, y dentro de ellas muchas mujeres asumen una carga desproporcionada. Una política pública justa debe ofrecer apoyo, respiro, orientación, formación, acompañamiento y recursos suficientes para que cuidar no signifique renunciar a la propia vida.

La Comunitat Valenciana necesita una acción inmediata y ambiciosa para la reducción de los tiempos de espera en dependencia y para mejorar la atención de las familias cuidadoras. Ese plan debe incluir refuerzo de personal de valoración, simplificación administrativa, seguimiento de expedientes, prioridad a situaciones de mayor vulnerabilidad y recursos de respiro familiar. Cuidar a quien cuida debe ser también una obligación pública.

Los cuidados son fundamentales para sostener la sociedad, y el personal que trabaja en este ámbito es imprescindible. Para fidelizarlo, el PSPV-PSOE se compromete a estabilizar las plantillas, homologar salarios y avanzar progresivamente hacia la equiparación de derechos con otros ámbitos profesionales.

Nuestro compromiso con una nueva política de longevidad

El PSPV-PSOE se compromete a promover una vida digna y activa a lo largo de todas las etapas de la vida. Las personas mayores no pueden ser vistas solo desde la dependencia o la fragilidad. Muchas quieren seguir participando, aprendiendo, aportando, cuidando, creando comunidad y formando parte activa de la vida social.

La Comunitat Valenciana debe impulsar un nuevo enfoque de longevidad, con políticas de autonomía personal, vivienda adaptada, atención domiciliaria, participación comunitaria, cultura, deporte, formación permanente, transporte accesible, voluntariado, prevención de la soledad y acompañamiento de proximidad.

La soledad no deseada debe abordarse como una prioridad pública y comunitaria. No basta con detectar casos. Hay que crear redes de proximidad, activar centros sociales, implicar a los ayuntamientos, reforzar la atención domiciliaria, mejorar el transporte y facilitar la participación social. La soledad se combate con servicios, pero también con comunidad.

Nuestro compromiso con la discapacidad y la atención temprana

El PSPV-PSOE se compromete a garantizar apoyos suficientes a las personas con discapacidad. Las políticas públicas deben avanzar en vida autónoma, accesibilidad universal, atención temprana, inclusión educativa, inserción laboral, participación social y recursos especializados. Las personas con discapacidad y sus entidades deben formar parte de la definición de las políticas que les afectan, desde el principio de autonomía, dignidad e igualdad de oportunidades.

La Generalitat debe reducir las listas de espera en el reconocimiento de la discapacidad, porque el retraso en el reconocimiento se convierte en una barrera para acceder a derechos. También debe hacer efectivo el derecho a la atención temprana, reforzar los equipos, ampliar coberturas por tramos de edad cuando sea necesario y coordinar sanidad, educación y servicios sociales para que las familias no tengan que peregrinar de una administración a otra.

La accesibilidad debe estar presente en el transporte, la vivienda, los centros públicos, la cultura, el deporte, el empleo, la educación, la comunicación y la vida comunitaria. Una Comunitat Valenciana inclusiva no se limita a eliminar barreras físicas. También elimina barreras administrativas, sociales y laborales.

Nuestro compromiso con los servicios sociales de proximidad

El PSPV-PSOE se compromete a fortalecer los servicios sociales municipales y comarcales con financiación adecuada y estable. Los ayuntamientos son la puerta más cercana a la ciudadanía y necesitan recursos suficientes, estabilidad profesional y menos burocracia. Los servicios sociales deben intervenir antes, acompañar mejor y coordinarse de forma efectiva con sanidad, educación, vivienda, empleo y entidades sociales.

Los servicios sociales no pueden ser una red de último recurso. Deben ser un pilar ordinario del Estado del bienestar. Deben detectar la pobreza infantil, acompañar a las familias, prevenir la exclusión, proteger ante la violencia, apoyar a personas con discapacidad, orientar ante la dependencia y activar recursos comunitarios.

La Generalitat debe garantizar una relación leal con los municipios. No puede trasladar responsabilidades sin recursos. Cuidar desde la proximidad exige reforzar las estructuras locales y comarcales que conocen la realidad de cada territorio.

El PSPV-PSOE impulsará un refuerzo estable de la atención primaria de servicios sociales, con financiación suficiente, equipos interdisciplinares, menos carga burocrática y mayor capacidad de intervención comunitaria. Los servicios sociales municipales deben tener medios para actuar antes de que una situación familiar, económica o personal se convierta en emergencia social.

Nuestro compromiso con la infancia vulnerable

El PSPV-PSOE se compromete a actuar con prioridad ante la pobreza infantil, la desprotección y la vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia. Ninguna persona menor de edad debe ver limitado su futuro por el hogar en el que nace. La igualdad de oportunidades empieza por garantizar protección, alimentación, vivienda, salud, educación, apoyo familiar, ocio educativo y seguridad emocional.

La Generalitat debe reforzar la coordinación entre servicios sociales, educación, sanidad y entidades del tercer sector para detectar antes las situaciones de riesgo y actuar con rapidez. La infancia vulnerable no puede quedar atrapada en compartimentos administrativos. Una niña con dificultades emocionales, una familia sin recursos, una menor víctima de acoso o una situación de desprotección necesitan una respuesta pública coordinada.

También debe impulsarse una protección más firme frente al acoso, el ciberacoso, la publicidad dañina, las apuestas, los contenidos que promueven consumos perjudiciales y todas las formas de explotación o violencia que afectan a menores. Proteger a la infancia es una obligación democrática.

Nuestro compromiso con la prevención y la salud pública

El PSPV-PSOE se compromete a cambiar la lógica del sistema para hacer de la prevención una prioridad. Prevenir es invertir mejor, es cuidar mejor. Prevenir es reforzar la atención primaria, detectar la soledad, intervenir ante la pobreza infantil, atender pronto la salud mental, adaptar viviendas, acompañar a quienes cuidan, promover hábitos saludables, coordinar servicios y evitar que la vulnerabilidad se convierta en exclusión.

La Comunitat Valenciana debe reforzar la salud pública. La experiencia de la pandemia demostró que la salud pública no puede ser un recurso residual. Debe ser una estructura fuerte, visible y preparada, sólidamente integrada con los departamentos de salud.

Hemos de ampliar la cartera de servicios en el sistema sanitario valenciano con nuevas pruebas de cribado de cáncer, ampliando la población a la que van dirigidos, más pruebas de cribado neonatal, mayor investigación e inversión en enfermedades raras.

Significa también avanzar hacia un modelo que integre la prevención en todos los niveles del sistema, desde la atención primaria hasta las políticas intersectoriales. Por esto hay que tender hacia el enfoque «Una sola salud» (One Health), en el que la colaboración entre equipos multidisciplinares trabaje desde los niveles local, nacional y global, para conseguir una salud óptima para las personas, los animales y nuestro medio ambiente, potenciando los servicios que desde los Centros de Salud Pública se prestan a la ciudadanía y al territorio.

Nuestro compromiso con la coordinación sociosanitaria

El PSPV-PSOE se compromete a superar la fragmentación entre sanidad y servicios sociales. La vida de las personas no se organiza por departamentos administrativos. Una persona mayor que vive sola puede necesitar seguimiento médico, ayuda domiciliaria, adaptación de vivienda y vínculo comunitario. Una persona con enfermedad crónica puede necesitar atención sanitaria, apoyo social y cuidados continuados. Una familia con una persona menor de edad en riesgo puede necesitar escuela, servicios sociales y salud mental al mismo tiempo.

La Generalitat debe diseñar un modelo real de coordinación sociosanitaria, haciendo coincidir mapas sociales y sanitarios, compartiendo información con garantías, estableciendo protocolos comunes y creando equipos de referencia para situaciones complejas. Las familias no pueden seguir haciendo de intermediarias de un sistema fragmentado.

La coordinación no es una palabra técnica. Es una forma concreta de cuidar mejor. Significa que la persona no tenga que repetir su historia en cada ventanilla, que los equipos profesionales trabajen con información compartida, que la respuesta llegue antes y que las situaciones de fragilidad no se pierdan entre administraciones.

El PSPV-PSOE se compromete a construir una Comunitat Valenciana que cuide, prevenga y responda. Una Comunitat donde la sanidad pública sea fuerte, donde la salud mental reciba respuesta, donde la dependencia sea un derecho efectivo, donde las personas mayores vivan con autonomía, donde la discapacidad cuente con apoyos suficientes, donde los servicios sociales actúen desde la proximidad y donde ninguna familia quede sola ante la enfermedad, la fragilidad o la vulnerabilidad.

Vivir bien no puede ser un privilegio. Debe ser un derecho garantizado por instituciones que cuidan, previenen y responden. Defender los servicios públicos significa convertirlos en seguridad vital, libertad real y dignidad para todas las personas.

BLOQUE 2. VIVIR AQUÍ
DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA, ADECUADA Y ASEQUIBLE
Vivienda, juventud y territorio

La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para la ciudadanía, especialmente para la juventud. Vivir aquí debería ser una posibilidad real para cualquier persona que quiera construir su vida en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, para demasiada gente, quedarse se ha convertido en una decisión cada vez más difícil. Muchas personas jóvenes no pueden emanciparse, aunque trabajen. Hay familias que dedican una parte excesiva de sus ingresos al alquiler. Hay personas mayores que quieren seguir viviendo en su barrio o en su pueblo, pero ven cómo se pierden servicios, transporte y vida comunitaria. Hay municipios que sienten que siempre llegan tarde las inversiones, las comunicaciones y las oportunidades. Hay comarcas enteras que tienen talento y capacidad, pero no siempre encuentran el apoyo necesario para desarrollarse.

La vivienda, la juventud y el territorio forman parte de una misma conversación política. No son asuntos separados. Hablan de igualdad, de proyecto de vida y de cohesión social. Una persona puede tener empleo y seguir sin poder independizarse. Una familia puede querer quedarse en su barrio y verse expulsada por los precios. Un pueblo puede tener historia, identidad y ganas de futuro, pero perder población si no cuenta con servicios, conectividad, vivienda, transporte y actividad económica. Una sociedad que no permite a su gente quedarse donde quiere vivir está fallando en algo esencial.

La Comunitat Valenciana necesita recuperar el derecho a quedarse. Quedarse no significa inmovilidad ni resignación. Significa que marcharse no sea la única salida para estudiar, trabajar, encontrar vivienda, formar una familia, cuidar a las personas mayores o vivir con dignidad. Significa que cada persona pueda decidir su proyecto vital sin que el mercado, la falta de servicios o el abandono institucional decidan por ella. Significa que la libertad de elegir dónde vivir sea algo más que una frase.

Durante los últimos años, la vivienda se ha situado en el centro de las preocupaciones ciudadanas. El problema no afecta solo a quienes tienen menos recursos, aunque golpea con más dureza a las personas y familias con menos ingresos. Afecta también a personas jóvenes con formación y empleo, a quienes sostienen sectores esenciales, a familias que no pueden cambiar de casa, aunque la necesiten, a personas separadas que deben rehacer su vida, a personas mayores con pensiones ajustadas, a municipios turísticos tensionados y a barrios donde el alquiler ha dejado de corresponderse con los salarios reales. La vivienda se ha convertido en una de las grandes desigualdades de nuestro tiempo.

No hay libertad real si una persona no puede acceder a una vivienda digna. La derecha suele hablar de libertad como si bastara con dejar actuar al mercado. Pero cuando el mercado expulsa a la gente de sus barrios, impide la emancipación juvenil o convierte la vivienda en un producto financiero, la política tiene la obligación de intervenir. La vivienda no puede ser tratada únicamente como una mercancía. Es un derecho, una condición de estabilidad vital y una pieza básica de cualquier proyecto de igualdad.

La Comunitat Valenciana necesita una política pública de vivienda mucho más ambiciosa, sostenida y reconocible. No bastan medidas aisladas ni anuncios de corto recorrido. Hace falta aumentar el parque público de vivienda, movilizar vivienda vacía con garantías, rehabilitar edificios, favorecer el alquiler asequible, colaborar con los ayuntamientos, aprovechar suelo público, ordenar mejor los usos turísticos cuando generan tensión residencial y dar prioridad a quienes encuentran más dificultades para acceder a una vivienda. La vivienda debe convertirse en una política estructural de la Generalitat, no en una respuesta ocasional ante la emergencia.

La juventud concentra muchas de las incertidumbres de la Comunitat Valenciana actual. Se pide a la juventud que se forme, que trabaje, que emprenda, que participe, que sea responsable y que sostenga el futuro, pero demasiadas veces no se le ofrecen las condiciones mínimas para hacerlo. No se puede pedir paciencia indefinida a una generación que encadena contratos precarios, salarios insuficientes, alquileres inasumibles y dificultades para acceder a servicios de salud mental, transporte, cultura o participación real. Confiar en la juventud no es hablar de ella. Es construir políticas con ella.

La emancipación juvenil debe ser una prioridad de país. No es solo una cuestión individual ni un problema privado de cada persona joven. Cuando una generación no puede emanciparse, se retrasa la construcción de proyectos de vida, se dificultan los proyectos familiares deseados, se reduce la autonomía personal, se agranda la desigualdad familiar y se transmite una sensación de bloqueo colectivo. Una Comunitat que quiere futuro debe tomarse en serio la vida de su juventud. La vivienda asequible, el empleo digno, el transporte, la formación, la cultura, la salud mental y la participación deben formar parte de una misma política de juventud.

El territorio también debe entenderse desde la igualdad. La Comunitat Valenciana es plural, diversa y profundamente territorial. No se vive igual en una gran ciudad que en una comarca de interior, en un municipio turístico, en un barrio vulnerable, en una zona metropolitana, en una pedanía, en un pueblo pequeño o en una ciudad media. Esa diversidad no es un problema. Es una riqueza. El problema aparece cuando la diversidad territorial se convierte en desigualdad de oportunidades. Cuando algunos lugares tienen transporte, servicios, vivienda, conectividad, empleo y actividad cultural, y otros tienen que pelear por lo básico.

El municipalismo debe volver a ocupar un lugar central en la política valenciana. Los ayuntamientos son la administración que primero escucha, primero detecta y primero responde. Están cerca de la vida real de la gente. Conocen las necesidades de los barrios, las familias, las asociaciones, los comercios, las personas mayores, la juventud, los colegios, los centros de salud y los servicios sociales. Pero la proximidad no basta si no va acompañada de recursos, competencias bien ordenadas y cooperación leal. La Generalitat debe mirar a los municipios como aliados, no como oficinas periféricas a las que trasladar problemas sin financiación suficiente.

Los barrios necesitan también una política propia. La desigualdad no se distribuye solo por renta familiar. También se expresa en el espacio urbano. Hay barrios con menos zonas verdes, peor transporte, viviendas más envejecidas, menos equipamientos, más dificultades de convivencia, menor actividad económica y una sensación de abandono que termina afectando a la autoestima colectiva. La regeneración urbana, la rehabilitación energética, la mejora del espacio público, la seguridad cotidiana, la cultura de proximidad, el comercio local y los servicios públicos cercanos deben formar parte de una estrategia de cohesión urbana.

Las ciudades medias y las áreas metropolitanas son otro elemento clave de la Comunitat Valenciana. Buena parte de la vida diaria no se organiza ya dentro de los límites administrativos de un solo municipio. Muchas personas viven en un lugar, trabajan en otro, estudian en otro, cuidan a familiares en otro y utilizan servicios en distintos municipios. Esa realidad exige planificación metropolitana, transporte público eficaz, coordinación en vivienda, gestión compartida de servicios, visión territorial y capacidad institucional. La vida cotidiana no entiende de fronteras administrativas cuando la gente necesita llegar a tiempo al trabajo, al centro de estudios, al hospital o a casa.

El transporte público es una política de igualdad. No es solo una cuestión de movilidad. Es una condición para acceder al empleo, a la educación, a la sanidad, a la cultura, al ocio, al cuidado y a la participación social. Una persona sin transporte adecuado tiene menos oportunidades. Una persona joven que depende de un autobús insuficiente tiene menos libertad. Una persona mayor sin conexión con el centro de salud o con los servicios básicos vive con más inseguridad. Un municipio mal conectado pierde actividad y población. La movilidad debe pensarse como un derecho cotidiano y como una herramienta de cohesión territorial.

La despoblación y el envejecimiento de algunas comarcas no pueden afrontarse con nostalgia ni con discursos genéricos sobre el mundo rural. Los pueblos necesitan servicios, vivienda, conectividad, transporte, empleo, escuela, sanidad, cultura, cuidados y apoyo a la actividad económica. También necesitan que se reconozca su papel en la sostenibilidad, la agricultura, la protección del territorio, la identidad cultural y la calidad de vida. El reto no es solo evitar que la gente se vaya. Es crear condiciones para que quien quiera quedarse pueda hacerlo y para que quien quiera volver encuentre oportunidades reales.

La política territorial debe evitar una Comunitat Valenciana a dos velocidades. No puede haber una Comunitat de escaparate y otra que se sienta al margen. Alicante, Castellón y Valencia, las comarcas del interior y las del litoral, los pueblos pequeños y las grandes ciudades, las áreas metropolitanas y los municipios rurales deben formar parte de un proyecto compartido. La igualdad territorial no significa uniformidad. Significa respeto, inversión justa, servicios adecuados y una mirada que entienda las necesidades específicas de cada lugar.

La vivienda, la juventud y el territorio también están vinculados al modelo productivo. Un territorio sin empleo digno expulsa población. Una zona con actividad económica, pero sin vivienda asequible termina expulsando a quienes trabajan en ella. Un municipio turístico sin regulación suficiente puede ver cómo la vivienda residencial se vuelve inaccesible.
Una comarca industrial necesita transporte, formación y suelo adecuado. Una ciudad universitaria necesita vivienda para el estudiantado y el personal investigador joven. Un pueblo agrícola necesita relevo generacional, servicios y conectividad. La política pública debe mirar estas relaciones de forma integrada.

El derecho a quedarse exige también una mirada cultural y comunitaria. La gente no vive solo en una vivienda. Vive en un entorno. Vive en una calle, en un barrio, en un pueblo, en una red de relaciones, en una memoria compartida y en una expectativa de futuro. Las políticas de vivienda y territorio deben cuidar esa dimensión comunitaria. No basta con construir. Hay que hacer barrios habitables, pueblos vivos, espacios públicos dignos, servicios cercanos, seguridad, convivencia y oportunidades de participación. La ciudad y el territorio no son solo soportes físicos. Son espacios de vida.

El actual Gobierno valenciano ha iniciado una clara regresión normativa, tratando la vivienda como un negocio y no como un derecho y quebrando las bases de su función social reconocidas en la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana. En vivienda ha elegido ponerse del lado de quienes no quieren ninguna regulación, aunque los precios expulsen de sus barrios a personas jóvenes, familias trabajadoras y parte del vecindario. La Generalitat y los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular han rechazado aplicar las herramientas previstas en la Ley estatal de Vivienda, se han negado a declarar zonas de mercado tensionado allí donde los precios lo justifican y han renunciado a utilizar todos los instrumentos disponibles para contener los alquileres.

Alicante es el ejemplo más claro de esta contradicción. El caso de las viviendas protegidas de Les Naus, actualmente sometido a investigación judicial, ha revelado graves fallos de transparencia y control en una promoción destinada a facilitar el acceso a la vivienda. La presencia entre las personas adjudicatarias de cargos municipales, personal funcionario y familiares de personas vinculadas a la administración obliga a extremar las garantías. Toda promoción de vivienda protegida debe contar con publicidad suficiente, registros abiertos de solicitantes, criterios objetivos, adjudicaciones trazables y control público efectivo, para asegurar que los recursos destinados a quienes más dificultades tienen no terminen beneficiando a quienes disponen de más información o capacidad de influencia.

Frente a esa falta de proyecto, el PSPV-PSOE debe defender una idea clara. La gente tiene derecho a vivir donde quiere vivir. Tiene derecho a no ser expulsada por los precios. Tiene derecho a disponer de servicios públicos cercanos. Tiene derecho a un transporte digno. Tiene derecho a que su pueblo, su barrio o su comarca no sean tratados como secundarios. Tiene derecho a que la juventud no sea una etapa de espera permanente, sino una etapa de autonomía, participación y futuro.

Compromisos para quedarse y construir futuro
Nuestro compromiso con el derecho a quedarse a vivir aquí

El PSPV-PSOE se compromete a dar cumplimiento a la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana, y a aplicar la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, para recuperar el derecho a vivir aquí como una de las grandes prioridades de la nueva etapa valenciana. La ciudadanía debe saber que queremos una Comunitat Valenciana donde quedarse no sea un privilegio, sino una opción real.
Quedarse en el barrio, en el pueblo, en la comarca o en la ciudad donde cada persona quiere construir su vida exige vivienda, empleo, transporte, servicios públicos, comercio, cultura, cuidados, seguridad y oportunidades.

Ese compromiso debe orientar el conjunto de las políticas públicas. No se trata solo de hacer más vivienda, ni solo de hablar de juventud, ni solo de reclamar inversiones territoriales. Se trata de mirar la vida real de la gente y entender que una persona no puede quedarse si tiene empleo pero no vivienda, si tiene vivienda pero no transporte, si tiene pueblo pero no servicios, si tiene formación pero no oportunidades o si quiere quedarse pero siente que su territorio queda siempre al final de las prioridades.

Nuestro compromiso es recuperar la vivienda como un derecho subjetivo y efectivo, situarla en la agenda pública y convertirla en el quinto pilar del Estado del Bienestar.

Nuestro compromiso con la vivienda asequible

El PSPV-PSOE se compromete a convertir la vivienda en una prioridad estructural de la Generalitat. La política pública debe orientarse a aumentar el parque de vivienda asequible, impulsar el alquiler protegido, movilizar vivienda vacía con garantías, rehabilitar edificios, aprovechar suelo público y colaborar con los ayuntamientos para responder a las necesidades reales de cada municipio.

La vivienda no puede depender solo de la lógica del mercado. Cuando el mercado no garantiza el derecho a vivir dignamente, las instituciones deben actuar. Eso significa utilizar todos los instrumentos legales disponibles, ampliar la capacidad pública, garantizar transparencia en la vivienda protegida y evitar que aquello que se crea para ayudar a quienes más dificultades tienen termine beneficiando a quienes disponen de más información, más contactos o más capacidad de influencia.

La Comunitat Valenciana necesita una política de vivienda valiente, sostenida y evaluable. Una política que actúe en las zonas tensionadas, que proteja a quienes viven de alquiler y a las familias trabajadoras, que facilite el acceso a personas jóvenes y a personas en situación de vulnerabilidad, que ordene mejor los usos del suelo y que haga de la vivienda pública una garantía de justicia, no una oportunidad para quienes están cerca del poder.

Nuestro compromiso con la emancipación juvenil

El PSPV-PSOE se compromete a situar la emancipación juvenil en el centro de la acción política. La juventud necesita empleo digno, vivienda asequible, salud mental, transporte, cultura, formación y participación real. No basta con pedir a la juventud que espere. Hay que cambiar las condiciones que le impiden avanzar.

La emancipación juvenil requiere ayudas claras, alquileres razonables, acompañamiento administrativo y fórmulas adaptadas a distintas situaciones vitales. La juventud no vive una realidad homogénea ni cuenta con las mismas redes familiares. Una política justa debe tener en cuenta a quienes trabajan con salarios bajos, a quienes estudian lejos de casa, a quienes encadenan empleos temporales, a quienes viven en municipios tensionados y a quienes no pueden contar con apoyo económico familiar.

La Generalitat debe construir políticas con la juventud y no solo para la juventud. Eso exige abrir espacios de participación que tengan incidencia real en decisiones sobre vivienda, empleo, movilidad, educación, cultura, clima, salud mental y vida comunitaria. Confiar en la juventud significa darle voz, recursos y capacidad para construir futuro.

Nuestro compromiso con barrios vivos y rehabilitación urbana

El PSPV-PSOE se compromete a impulsar una política de rehabilitación urbana y mejora de barrios. La vivienda digna no se limita al interior de cada casa. Depende también del edificio, de la calle, del espacio público, de la accesibilidad, de la eficiencia energética, de las zonas verdes, de los equipamientos, del comercio de proximidad y de la seguridad cotidiana.

La Generalitat debe colaborar con los ayuntamientos para rehabilitar, regenerar y mejorar barrios, especialmente allí donde se acumulan desigualdades sociales, viviendas envejecidas y falta de inversión. Un barrio cuidado genera pertenencia, seguridad y confianza. Un barrio abandonado multiplica la desigualdad y debilita la convivencia.

Esa política debe combinar rehabilitación de viviendas, mejora energética, accesibilidad, renovación de espacios públicos, cultura de proximidad, equipamientos, apoyo al comercio local, convivencia y refuerzo de servicios públicos. La cohesión social también se construye calle a calle.

Nuestro compromiso con el equilibrio entre vivienda, turismo y ciudad

El PSPV-PSOE se compromete a ordenar mejor la relación entre vivienda residencial, turismo y uso del suelo. La Comunitat Valenciana necesita actividad turística, pero también necesita barrios vivos y vivienda disponible para quienes trabajan, estudian y viven aquí todo el año.

La regulación debe evitar que determinadas zonas se vacíen de población residente, que el alquiler se dispare y que la ciudad pierda vida comunitaria. El turismo debe formar parte de un modelo equilibrado, no sustituir el derecho de la gente a vivir en su barrio.

Una ciudad no puede convertirse solo en escaparate. Un municipio turístico no puede expulsar a quienes sostienen sus servicios, su hostelería, su comercio, sus cuidados y su vida diaria. La política pública debe hacer compatible la actividad económica con el derecho a la vivienda y con la convivencia vecinal.

Nuestro compromiso con el municipalismo

El PSPV-PSOE se compromete a reforzar el municipalismo como base de la nueva etapa valenciana. Los ayuntamientos deben ser aliados centrales de las políticas de vivienda, juventud, movilidad, servicios sociales, cultura, seguridad, comercio local, cuidados y cohesión comunitaria.

Para ello necesitan financiación adecuada, cooperación institucional, apoyo técnico y respeto a su conocimiento del territorio. La Generalitat debe dejar de trasladar problemas a los municipios sin recursos suficientes. La proximidad solo funciona si va acompañada de medios, lealtad institucional y capacidad real de actuación.

Los municipios conocen mejor que nadie las necesidades de sus barrios, asociaciones, familias, centros educativos, comercios, la juventud y las personas mayores. Una Generalitat útil debe trabajar con ellos, no sustituirlos ni responsabilizarlos de problemas que requieren respuesta autonómica.

Nuestro compromiso con una movilidad cotidiana justa

El PSPV-PSOE se compromete a garantizar una movilidad cotidiana más justa, útil y sostenible. El transporte público debe conectar barrios, pueblos, ciudades, centros de trabajo, hospitales, universidades, institutos, estaciones, polígonos industriales y espacios de servicios.

La movilidad no puede depender solo del coche privado ni puede dejar fuera a la juventud, las personas mayores, las personas con discapacidad o las familias con menos recursos. Una persona sin transporte adecuado tiene menos oportunidades. Una persona joven que depende de un autobús insuficiente tiene menos libertad. Una persona mayor sin conexión con el centro de salud o con los servicios básicos vive con más inseguridad.

La Generalitat debe impulsar una red de transporte más coordinada, accesible y pensada desde la vida real. La movilidad es una condición básica de igualdad territorial, de acceso al empleo, de conciliación y de cohesión social.

Nuestro compromiso con las infraestructuras y las conexiones estratégicas

El PSPV-PSOE se compromete a vertebrar la Comunitat Valenciana mediante una red de infraestructuras y transporte público fiable, accesible y sostenible. La Generalitat defenderá la mejora de Cercanías y de los servicios ferroviarios regionales, reforzará las conexiones interurbanas y metropolitanas y avanzará en la integración de Metrovalencia, TRAM, autobuses y movilidad de última milla. En las áreas metropolitanas impulsará aparcamientos disuasorios conectados con el transporte público, flotas de bajas emisiones y ejes ciclopeatonales estratégicos.

La planificación viaria y ferroviaria debe alinearse con la adaptación climática y la sostenibilidad. La Generalitat impulsará el mantenimiento preventivo y la monitorización en tiempo real de las infraestructuras mediante sensores y herramientas de análisis, para anticipar fallos y reducir riesgos. También defenderá el Corredor Mediterráneo, la conexión de puertos, aeropuertos, áreas industriales y nodos logísticos, y unas carreteras seguras y resilientes que mejoren la competitividad y la cohesión territorial.

Nuestro compromiso con pueblos vivos y comarcas con futuro

El PSPV-PSOE se compromete a afrontar la despoblación y el envejecimiento de determinadas comarcas con políticas reales que permitan vivir y construir un proyecto de vida en ellas. Los pueblos necesitan vivienda disponible, servicios públicos cercanos, transporte, conectividad digital, apoyo al comercio, actividad económica, cultura, cuidados, escuela, sanidad y oportunidades para la juventud y las familias.

No se trata de conservar los pueblos como una imagen del pasado. Se trata de hacerlos viables como espacios de vida, innovación, sostenibilidad y futuro. El mundo rural necesita respeto, inversión, servicios y una mirada que reconozca su papel en la sostenibilidad, la agricultura, la protección del territorio, la identidad cultural y la calidad de vida.

La Generalitat debe garantizar que las comarcas del interior, los municipios pequeños y las zonas con menor densidad de población formen parte del proyecto valenciano con los mismos derechos y con respuestas adaptadas a su realidad. La igualdad territorial no significa uniformidad. Significa que nadie quede atrás por vivir lejos de los grandes núcleos urbanos.

Nuestro compromiso con los territorios rurales y de montaña

El PSPV-PSOE se compromete a situar los territorios rurales y de montaña entre las prioridades estratégicas de la Comunitat Valenciana. Mantenerlos vivos es una cuestión de cohesión y equilibrio territorial, pero también de conservación del patrimonio natural y cultural. Estos territorios protegen ecosistemas y paisajes, sostienen actividades agrícolas, ganaderas y forestales y cumplen una función esencial en la prevención de incendios, la gestión del agua y la adaptación climática.

Su futuro debe construirse combinando tradición e innovación y garantizando el protagonismo de quienes viven y trabajan en ellos. La conexión con universidades, centros de investigación, economía social y nuevas tecnologías puede generar oportunidades vinculadas a la bioeconomía, la gestión forestal, la producción agroalimentaria de calidad, la digitalización y los nuevos servicios. Las comunidades locales, el sector agrario y forestal, las empresas, los ayuntamientos y el tejido asociativo contribuyen al interés general cuidando y manteniendo vivo el territorio.

Por eso defendemos un gran acuerdo valenciano por el mundo rural y de montaña que integre servicios públicos, vivienda, movilidad, actividad económica, innovación y protección del territorio. No queremos territorios protegidos pero vacíos. Queremos territorios vivos, habitados y cuidados, capaces de conservar su patrimonio y ofrecer nuevas oportunidades para desarrollar un proyecto de vida.

Nuestro compromiso con la diversidad territorial

El PSPV-PSOE se compromete a reconocer la diversidad territorial de la Comunitat Valenciana con inversión justa y planificación compartida. Cada comarca tiene necesidades distintas y potencialidades propias. La política autonómica debe escuchar a los territorios, planificar con ellos y garantizar que ninguna zona quede relegada.

La Comunitat Valenciana no puede avanzar a dos velocidades. Alicante, Castellón y Valencia, las comarcas del interior y las del litoral, los pueblos pequeños y las grandes ciudades, las áreas metropolitanas y los municipios rurales deben formar parte de un proyecto compartido. La igualdad territorial exige mirar de manera equilibrada al litoral y al interior, a las grandes ciudades y a los pueblos pequeños, a las áreas metropolitanas y a las comarcas con menor densidad de población.

Ese equilibrio también exige entender mejor las áreas metropolitanas y las ciudades medias. Muchas personas viven en un municipio, trabajan en otro, estudian en otro y utilizan servicios en varios más. La vida cotidiana no entiende de fronteras administrativas. Por eso hacen falta planificación metropolitana, transporte público eficaz, coordinación en vivienda, servicios compartidos y capacidad institucional.

Quedarse debe volver a ser una opción de libertad. Las políticas de vivienda, juventud y territorio deben garantizar que cada persona pueda construir su proyecto de vida en la Comunitat Valenciana sin que los precios, la falta de servicios, el abandono institucional o la desigualdad territorial decidan por ella.

BLOQUE 3. PROSPERAR
CONSTRUIR FUTURO. GARANTIZAR OPORTUNIDADES
Trabajo digno, economía productiva, Formación Profesional, universidad, ciencia e innovación

La Comunitat Valenciana necesita recuperar la ambición de prosperar. Prosperar no significa crecer de cualquier manera ni aceptar que el futuro dependa de salarios bajos, precariedad, especulación o decisiones tomadas lejos de nuestra tierra. Prosperar significa crear riqueza, repartir mejor las oportunidades, fortalecer el tejido productivo, mejorar las condiciones de trabajo, incorporar conocimiento, cuidar el territorio y garantizar que el progreso económico se note en la vida cotidiana de la mayoría.

La economía española está demostrando una fortaleza reconocida dentro y fuera de nuestro país. Crece, crea empleo y muestra una capacidad de resistencia que no puede ignorarse. La cuestión política decisiva es cómo aprovechar ese crecimiento para mejorar de manera más clara la vida de la clase media y trabajadora. Para el PSPV-PSOE, el crecimiento económico debe servir para ampliar oportunidades, mejorar salarios, reducir precariedad, facilitar la emancipación juvenil, reforzar los servicios públicos, apoyar a las buenas empresas y hacer que la riqueza generada llegue mejor al conjunto de la sociedad.

La Comunitat Valenciana posee una base económica muy potente. Tiene industria, agricultura, pesca, turismo, comercio, universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos, puertos, capacidad exportadora, economía social, pequeñas y medianas empresas, trabajo autónomo, talento joven y una cultura del trabajo profundamente arraigada. Tiene comarcas industriales con identidad propia, sectores tradicionales capaces de innovar, empresas familiares que han sostenido empleo durante generaciones, nuevos proyectos tecnológicos, un sistema universitario con enorme capacidad y una Formación Profesional que puede ser una palanca decisiva para el futuro.

Pero ese potencial necesita dirección política. No basta con confiar en que el mercado ordene por sí solo el desarrollo económico. La Comunitat Valenciana necesita una Generalitat que acompañe, planifique, escuche a los sectores productivos, apoye a las buenas empresas, facilite la innovación, reduzca trabas innecesarias, defienda el empleo digno, conecte formación y tejido productivo, impulse la transición ecológica y digital, y actúe con visión territorial. La economía valenciana no necesita menos política. Necesita una mejor política económica.

El trabajo digno debe estar en el centro de esa visión. No hay prosperidad real si una persona trabaja y sigue siendo pobre. No hay futuro compartido si la juventud encadena contratos inestables y salarios que no permiten emanciparse. No hay igualdad si las mujeres siguen soportando brechas salariales, mayor parcialidad, más dificultades de conciliación y una carga desigual de los cuidados. No hay cohesión territorial si algunas comarcas pierden empleo de calidad y otras concentran oportunidades sin vivienda asequible ni transporte suficiente. El empleo no puede ser solo una cifra. Debe ser una garantía de autonomía personal y de vida digna.

La Comunitat Valenciana debe apostar por un modelo productivo que cree más valor y mejores empleos. Eso exige reforzar la industria, modernizar los sectores tradicionales, impulsar la innovación, mejorar la cualificación profesional, apoyar la internacionalización, favorecer el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, proteger el comercio de proximidad, apoyar el trabajo autónomo y ordenar la actividad turística desde criterios de sostenibilidad y calidad. La competitividad no puede basarse en pagar menos. Debe basarse en producir mejor, innovar más, aprovechar el conocimiento y repartir de forma más justa los beneficios del progreso.

La industria valenciana debe ser una prioridad estratégica. No solo porque genera empleo más estable y mayor capacidad exportadora, sino porque vertebra comarcas enteras, sostiene cadenas de proveedores, impulsa formación especializada y da autonomía económica al territorio. Sectores como el cerámico, el calzado, el textil, el juguete, el mueble, el metal, la automoción, la alimentación, la química, el plástico, el mármol, el packaging o las energías limpias forman parte de una economía real que necesita apoyo, innovación y estabilidad. La reindustrialización no puede ser una palabra vacía. Debe traducirse en suelo industrial adecuado, energía competitiva, infraestructuras, digitalización, investigación aplicada, formación profesional, eficiencia energética, simplificación administrativa responsable y acompañamiento ante crisis sectoriales.

Las pequeñas y medianas empresas, el trabajo autónomo, la economía social y el comercio de proximidad son una parte esencial de la economía valenciana. Necesitan procedimientos burocráticos más ágiles, más apoyo en digitalización, relevo generacional, financiación, formación, internacionalización, contratación pública accesible, asesoramiento y estabilidad normativa. La buena empresa, la que crea empleo digno, innova, cumple, arraiga en el territorio y contribuye al bienestar común, debe encontrar en la Generalitat una aliada. El comercio local, además, no es solo una actividad económica. Es vida de barrio, seguridad, relación social, empleo, identidad urbana y equilibrio territorial.

La Formación Profesional debe ocupar un lugar central en el modelo económico valenciano. La FP conecta educación, empleo, empresas, juventud, recualificación de personas adultas y territorio. Puede dar respuesta a sectores que necesitan talento, abrir oportunidades a jóvenes que quieren trabajar en su comarca, mejorar la empleabilidad de personas desempleadas y facilitar que las personas trabajadoras en activo puedan actualizar sus competencias. La FP no es una vía secundaria. Es una de las grandes infraestructuras sociales y productivas de una economía moderna.

La universidad, la ciencia y la innovación deben conectar mejor con la economía productiva y con los grandes retos sociales. La Comunitat Valenciana cuenta con universidades, institutos tecnológicos, centros de investigación, parques científicos, hospitales con capacidad investigadora, empresas innovadoras y talento joven formado en nuestras aulas. Ese ecosistema debe ser tratado como una infraestructura estratégica de país. El conocimiento debe convertirse en empleo de calidad, innovación, mejores servicios públicos, transferencia tecnológica, soluciones ambientales, salud, industria avanzada, cultura científica y oportunidades para la juventud.

La transición digital y la inteligencia artificial deben abordarse desde una perspectiva social y productiva. No pueden ser solo un campo de negocio para una minoría ni una amenaza para quienes tienen menos capacidad de adaptación. La Generalitat debe ayudar a empresas, plantillas, administraciones y centros formativos a incorporar tecnología con sentido, proteger derechos, mejorar productividad y evitar nuevas brechas. La digitalización debe servir para trabajar mejor, producir mejor, gestionar mejor y ampliar oportunidades. No para sustituir sin más a las personas ni para precarizar más el empleo.

La transición ecológica debe ser también una oportunidad económica. La lucha contra el cambio climático, la eficiencia energética, las energías renovables bien planificadas, la movilidad sostenible, la economía circular, la rehabilitación de viviendas, la gestión del agua, la protección del territorio y la adaptación de los sectores productivos pueden generar empleo, innovación y nueva actividad económica. Pero esa transición debe hacerse con justicia territorial, diálogo social y respeto al entorno. No se trata de enfrentar economía y ecología. Se trata de entender que no habrá economía sólida en un territorio ambientalmente frágil y mal preparado.

El turismo, la agricultura, la pesca y el sector agroalimentario deben formar parte de una misma estrategia de prosperidad sostenible. El turismo debe generar empleo de calidad, respetar el territorio, convivir con el derecho a la vivienda, cuidar los recursos naturales, desestacionalizar la actividad y distribuir mejor sus beneficios. La agricultura, la pesca y el sector agroalimentario necesitan agua, innovación, relevo generacional, precios justos, apoyo frente a la competencia desleal, transformación digital, canales de comercialización adecuados y reconocimiento social. Defender estos sectores es defender economía, territorio, alimentación, cultura y futuro.

La igualdad debe formar parte del modelo económico. Las mujeres no pueden seguir soportando peores salarios, más parcialidad, más interrupciones profesionales y más responsabilidades de cuidados sin reconocimiento. La economía valenciana necesita incorporar todo el talento disponible y remover los obstáculos que impiden la plena igualdad laboral. También debe abrir más oportunidades a personas jóvenes, personas con discapacidad, personas desempleadas de larga duración, personas mayores de cincuenta años, personas migrantes y colectivos que encuentran más dificultades para acceder a empleo digno.

El diálogo social debe recuperar centralidad. Sindicatos, organizaciones empresariales, cooperativas, universidades, institutos tecnológicos, entidades locales, sectores productivos y sociedad civil deben participar en la definición de las grandes prioridades económicas. La prosperidad no se decreta desde un despacho. Se construye con acuerdos, estabilidad, confianza y corresponsabilidad. La Comunitat Valenciana necesita menos ruido y más concertación. Menos propaganda y más estrategia. Menos ocurrencias y más trabajo sostenido.

El actual gobierno del PP, condicionado por Vox no ha ofrecido una orientación económica a la altura de las capacidades de esta tierra. Ha confundido bajar impuestos a quienes más tienen con política económica. Ha hablado de libertad mientras debilita recursos públicos necesarios para formar talento, sostener servicios, apoyar sectores estratégicos y modernizar la economía. Ha utilizado la simplificación administrativa como eslogan, pero sin construir una estrategia sólida de reindustrialización, innovación, empleo digno y cohesión territorial. Y cuando sectores productivos concretos han reclamado respuestas, demasiadas veces se ha encontrado más pendiente del anuncio que del acompañamiento real.

La economía valenciana no necesita una Generalitat que se limite a hacerse fotos con las empresas cuando las cosas van bien y desaparezca cuando llegan las dificultades. Necesita un gobierno que entienda los sectores, escuche a quienes producen, anticipe los cambios, defienda a las personas trabajadoras, impulse la innovación y sitúe el interés general por encima de cualquier cálculo ideológico. La empresa valenciana seria no necesita privilegios. Necesita estabilidad, infraestructuras, talento, financiación, energía, menos burocracia inútil, seguridad jurídica y una administración que funcione.

Ese es el contraste de fondo. Frente a la economía del privilegio, el PSPV-PSOE debe defender una economía de la mayoría. Una economía que reconozca a quien trabaja, a quien emprende, a quien innova, a quien exporta, a quien mantiene abierto un comercio, a quien sostiene una explotación agraria, a quien investiga, a quien enseña, a quien cuida y a quien arriesga para crear empleo digno. La prosperidad compartida no se construye contra las empresas ni contra quienes trabajan. Se construye con buenas empresas, buenos empleos, buenos servicios públicos y una Generalitat capaz de unir todo ese potencial.

La Comunitat Valenciana puede ser una de las grandes regiones productivas, innovadoras y sostenibles del Mediterráneo europeo. Para lograrlo, necesita una estrategia económica que combine industria, conocimiento, trabajo digno, sostenibilidad, cohesión territorial y orgullo productivo. No se trata de elegir entre tradición y modernidad. Se trata de hacer que nuestros sectores tradicionales sean más fuertes con innovación, que los nuevos sectores arraiguen en el territorio y que el crecimiento económico se traduzca en una vida mejor para la ciudadanía.

Compromisos para prosperar con trabajo digno
Nuestro compromiso con el trabajo digno

El PSPV-PSOE se compromete a situar el trabajo digno en el centro de la política económica valenciana. La Generalitat debe impulsar, junto al Gobierno de España, los agentes sociales y los sectores productivos, una agenda valenciana por el empleo estable, los salarios dignos, la igualdad laboral, la seguridad en el trabajo, la conciliación, la mejora de condiciones profesionales y el derecho a la desconexión.

El empleo no puede medirse solo por cantidad. Debe medirse también por su calidad y por su capacidad para permitir una vida autónoma. Trabajar debe volver a ser una garantía de proyecto vital, no una forma de precariedad permanente. La nueva etapa valenciana debe tener como prioridad que el crecimiento económico se traduzca en mejores empleos, mejores salarios, mejores horarios y más estabilidad.

La Generalitat debe orientar sus políticas de empleo hacia la juventud, las mujeres, las personas mayores de cincuenta años, las personas con discapacidad, las personas desempleadas de larga duración y los colectivos que encuentran más barreras. La política pública debe ayudar a que nadie quede atrapado en la precariedad por edad, origen, género, discapacidad, territorio o falta de formación.

Nuestro compromiso con una economía que crece y reparte mejor

El PSPV-PSOE se compromete a aprovechar el crecimiento económico para mejorar la vida de la clase media y trabajadora. La buena marcha de la economía debe traducirse en más seguridad vital, mejores servicios públicos, más oportunidades para la juventud, más capacidad de emancipación, más inversión productiva y más apoyo a quienes sostienen la economía real.

La Generalitat debe impulsar una estrategia de prosperidad compartida que conecte empleo, vivienda, formación, servicios públicos, innovación, industria y cohesión territorial. No basta con que mejoren los grandes indicadores. La ciudadanía tiene que notar el crecimiento en su salario, en su estabilidad laboral, en su capacidad para llegar a fin de mes, en sus oportunidades de formación y en la posibilidad de construir un proyecto de vida.

La riqueza generada en la Comunitat Valenciana debe servir para modernizar nuestra economía, mejorar nuestras infraestructuras, fortalecer nuestros servicios públicos y reducir desigualdades. Crecer más solo tiene sentido si sirve para vivir mejor.

Nuestro compromiso con la industria valenciana y la economía productiva

El PSPV-PSOE se compromete a reforzar la industria valenciana como prioridad estratégica. La Comunitat Valenciana necesita una política industrial sostenida, con apoyo a la modernización, digitalización, eficiencia energética, innovación, internacionalización, suelo industrial adecuado, infraestructuras, formación especializada y acompañamiento ante crisis sectoriales.

Los sectores industriales que vertebran nuestras comarcas deben sentir que la Generalitat está a su lado. El cerámico, el calzado, el textil, el juguete, el mueble, el metal, la automoción, la alimentación, la química, el plástico, el mármol, el packaging y las energías limpias necesitan una administración que escuche, planifique, coordine recursos y defienda empleo. La Generalitat debe poner en marcha una agenda valenciana de reindustrialización basada en conocimiento, sostenibilidad y empleo digno. Esa agenda debe combinar apoyo a sectores tradicionales, impulso a nuevas actividades, eficiencia energética, innovación aplicada, economía circular, cooperación con institutos tecnológicos y una relación estable con universidades y centros de Formación Profesional.

Nuestro compromiso con buenas empresas, pymes, trabajo autónomo y economía social

El PSPV-PSOE se compromete a apoyar a las buenas empresas valencianas, a las pequeñas y medianas empresas, al trabajo autónomo y a la economía social. La empresa que crea empleo digno, innova, cumple, arraiga en el territorio y contribuye al bienestar común debe encontrar en la Generalitat una aliada exigente, cercana y útil.

La Generalitat debe reducir burocracia innecesaria, facilitar el acceso a ayudas, promover la digitalización, apoyar el relevo generacional, mejorar la financiación, facilitar la contratación pública a pequeñas empresas y ofrecer asesoramiento estable. La simplificación administrativa debe servir para que las empresas serias puedan trabajar mejor, no para debilitar controles ni abrir la puerta a abusos.

También debe reforzarse la economía social, cooperativa y de proximidad. En muchos sectores valencianos, las cooperativas han demostrado capacidad para sostener empleo, arraigo territorial, innovación y reparto más justo del valor. Una economía moderna no solo necesita grandes empresas. Necesita redes productivas sólidas, colaboración, responsabilidad y compromiso con el territorio.

Nuestro compromiso con la Formación Profesional

El PSPV-PSOE se compromete a garantizar una Formación Profesional pública suficiente, moderna y vinculada al territorio. Ninguna persona joven debe verse obligada a matricularse en un centro privado porque no encuentra plaza pública en el ciclo que necesita. La Generalitat debe planificar la oferta de FP con datos reales de demanda, necesidades productivas, sectores emergentes y equilibrio territorial, con más plazas públicas, más profesorado, mejores equipamientos y más capacidad para adaptar la oferta a la industria, los cuidados, la transición ecológica, la digitalización, el turismo de calidad, el comercio, la agricultura, la logística, la sanidad y los servicios avanzados.

La FP debe ser una gran palanca de igualdad y de modelo productivo. Debe permitir que una persona joven encuentre una oportunidad sin abandonar su comarca, que una persona adulta pueda recualificarse y que las empresas dispongan de talento formado. La nueva etapa valenciana debe plantear un mapa de FP pública por comarcas, con centros modernizados, equipamientos actualizados, FP Dual con garantías, acreditación de competencias y orientación profesional a lo largo de la vida.

Nuestro compromiso con universidades, ciencia e investigación

El PSPV-PSOE se compromete a convertir las universidades, la ciencia y la investigación en una de las grandes fortalezas sociales y productivas de la Comunitat Valenciana. El conocimiento no puede quedar encerrado en laboratorios, aulas o despachos. Debe convertirse en empleo de calidad, innovación, mejores servicios públicos, transferencia tecnológica, soluciones ambientales, salud, industria avanzada, cultura científica y oportunidades para la juventud.

La Generalitat debe reforzar la financiación universitaria con un marco estable, suficiente y transparente, que permita planificar a medio y largo plazo. También debe mejorar la carrera investigadora, apoyar al personal investigador joven, facilitar el retorno de talento valenciano, atraer perfiles internacionales, reforzar grupos consolidados y garantizar que la ciencia tenga estabilidad suficiente para producir resultados. La ciencia exige tiempo, equipos, confianza y continuidad. No se improvisa con anuncios.

La transferencia de conocimiento debe convertirse en una prioridad de gobierno. Universidades, institutos tecnológicos, centros de investigación, Formación Profesional, empresas y administraciones deben trabajar con más continuidad y menos compartimentos separados. La Generalitat debe impulsar proyectos compartidos, doctorados industriales, cátedras vinculadas a retos estratégicos, laboratorios de innovación y espacios de cooperación donde el conocimiento llegue de verdad a las pymes, al sector público y a los territorios.

La Comunitat Valenciana necesita una agenda de ciencia aplicada a sus grandes retos. Agua, salud, envejecimiento, cambio climático, agricultura, energía, inteligencia artificial, movilidad, turismo sostenible, industria circular, nuevos materiales, biotecnología, salud digital, ciberseguridad, alimentación, cuidados, educación y prevención de emergencias deben formar parte de una estrategia compartida. La ciencia no es un lujo. Es una herramienta de progreso, de seguridad, de soberanía y de buen gobierno.

La universidad debe seguir siendo también un ascensor social y un espacio de libertad. El acceso a los estudios universitarios no puede depender de la renta familiar, del código postal o de la capacidad de una familia para sostener alojamiento, transporte y materiales. Una política universitaria progresista debe reforzar becas, residencias, transporte, orientación, salud mental, inclusión del estudiantado con discapacidad y medidas para que ninguna persona joven renuncie a estudiar por razones económicas.

Nuestro compromiso con la innovación territorial y la transición justa

El PSPV-PSOE se compromete a impulsar ecosistemas de innovación en todas las provincias y comarcas. La innovación no puede concentrarse en unos pocos espacios ni depender solo de grandes ciudades. Alicante, Elche, Alcoy, Ibi, Elda, Castelló, Sagunt, València, Gandia, la Ribera, la Safor, la Vega Baja, el Vinalopó, la Plana, l'Alcoià, el Comtat y tantas otras comarcas tienen capacidades propias que deben ser reconocidas.

La Generalitat debe apoyar parques científicos, CEEI, institutos tecnológicos, viveros de empresas, laboratorios de innovación, polos de emprendimiento, espacios de coworking, hubs logísticos, economía circular y proyectos de transferencia. La innovación debe estar al servicio de una economía arraigada. No se trata de crear escaparates tecnológicos, sino de ayudar a que una pyme industrial incorpore inteligencia artificial, que una cooperativa agraria ahorre agua, que un comercio de barrio se digitalice o que una comarca industrial refuerce su competitividad sin perder empleo.

La transición ecológica y digital debe ser una oportunidad para la mayoría. La modernización no puede dejar atrás a personas trabajadoras y autónomas, pymes, explotaciones agrarias, comercios o municipios pequeños. La digitalización, la inteligencia artificial, la economía circular, las energías limpias, la rehabilitación, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la adaptación climática deben incorporarse con criterios de justicia social. Deben servir para trabajar mejor, producir mejor, cuidar mejor y vivir mejor.

Nuestro compromiso con el comercio, el turismo y los sectores de proximidad

El PSPV-PSOE se compromete a proteger y modernizar el comercio de proximidad. El comercio local es vida de barrio, seguridad, relación social, empleo, identidad urbana y equilibrio territorial. La Generalitat debe impulsar digitalización, relevo generacional, eficiencia energética, formación, apoyo a mercados municipales, promoción del consumo local, mejora de entornos urbanos y colaboración con ayuntamientos.

El PSPV-PSOE se compromete también a impulsar un turismo sostenible, inteligente, desestacionalizado y compatible con la vida cotidiana. La Comunitat Valenciana debe seguir siendo una potencia turística, pero no puede medir el éxito solo por el número de visitantes. El turismo debe generar empleo de calidad, respetar el territorio, convivir con el derecho a la vivienda, cuidar el agua, proteger el litoral y distribuir mejor sus beneficios.

La calidad turística empieza por el respeto a las personas trabajadoras, la población residente y el territorio. Hay que impulsar turismo cultural, deportivo, gastronómico, rural, científico, de congresos, de salud, de interior y de naturaleza, para que la actividad no dependa solo de temporadas concretas ni de modelos de bajo valor añadido.

Nuestro compromiso con agricultura, pesca y sector agroalimentario

El PSPV-PSOE se compromete a defender la agricultura, la pesca y el sector agroalimentario como sectores de futuro. La tierra y el mar no son solo paisaje. Son economía, cultura, empleo, alimentación, equilibrio territorial y forma de vida.

La Generalitat debe apoyar el relevo generacional, la innovación, la modernización, los precios justos, la comercialización, la transformación digital, el ahorro de agua, la adaptación climática, el cooperativismo, la ganadería extensiva, la pesca sostenible y la defensa frente a prácticas desleales. La agricultura valenciana no puede sobrevivir solo con discursos. Necesita agua, rentabilidad, infraestructuras, investigación, protección del territorio y reconocimiento social.

El sector agroalimentario debe integrarse en una estrategia de valor añadido. Producir alimentos de calidad, transformar, comercializar, exportar, innovar y conectar con gastronomía, turismo y sostenibilidad puede generar empleo y orgullo territorial. Defender el campo y el mar es defender una Comunitat Valenciana equilibrada.

Nuestro compromiso con la juventud, el talento y la inclusión laboral

El PSPV-PSOE se compromete a construir una economía que ofrezca oportunidades reales a la juventud. La generación mejor formada no puede ser una generación condenada a vivir en espera permanente. Si la juventud no puede emanciparse, si los salarios no llegan, si la vivienda absorbe la vida y si la estabilidad laboral no aparece, el crecimiento económico no se convierte en futuro.

La Generalitat debe impulsar empleo joven de calidad vinculado a innovación, transición ecológica, cuidados, industria, ciencia, cultura, digitalización y economía social. También debe reforzar la orientación profesional, las becas, la movilidad formativa, las prácticas de calidad, el apoyo al emprendimiento joven y la participación de la juventud en las decisiones económicas.

El PSPV-PSOE se compromete a promover una economía más igualitaria e inclusiva. Las políticas económicas deben incorporar de manera efectiva la igualdad entre mujeres y hombres, la inserción laboral de personas con discapacidad, las oportunidades para personas mayores de cincuenta años, la atención a personas desempleadas de larga duración y la integración laboral de quienes encuentran más barreras. Una economía que excluye talento es una economía más débil.

Nuestro compromiso con el diálogo social y la planificación compartida

El PSPV-PSOE se compromete a recuperar el diálogo social y la planificación compartida como forma de gobernar la economía. La prosperidad no se decreta desde un despacho. Se construye con sindicatos, organizaciones empresariales, cooperativas, universidades, institutos tecnológicos, ayuntamientos, sectores productivos y sociedad civil.

La Generalitat debe impulsar acuerdos de largo recorrido en empleo, industria, Formación Profesional, ciencia, transición ecológica, comercio, turismo, agricultura, digitalización e innovación. La economía valenciana necesita estrategia, seguimiento, evaluación y capacidad de rectificación. No necesita anuncios aislados ni ocurrencias.

La nueva etapa valenciana debe basarse en grandes consensos productivos. Para cambiar de verdad el modelo económico hay que contar con todos los sectores y colectivos que crean empleo, forman talento, investigan, producen, cuidan y sostienen la vida diaria de esta tierra. Prosperar no puede ser un privilegio reservado a quienes ya tienen más oportunidades. Debe ser una posibilidad real para quienes trabajan, emprenden, estudian, investigan, cuidan, producen y quieren construir su futuro en la Comunitat Valenciana. Crecer más solo tiene sentido si permite repartir mejor y convertir el progreso económico en vidas mejores.

BLOQUE 4. PROTEGER EL TERRITORIO, PROTEGER A LAS PERSONAS
DANA, emergencias, clima, agua y territorio

La Comunitat Valenciana ha aprendido de la forma más dolorosa que la seguridad no puede darse por supuesta. La DANA del 29 de octubre de 2024 no fue solo una catástrofe natural. Fue una tragedia humana, social e institucional que marcó un antes y un después en la conciencia colectiva de nuestra tierra. Familias que perdieron a personas queridas, municipios enteros golpeados por el agua, viviendas destrozadas, comercios arruinados, campos arrasados, infraestructuras colapsadas y una ciudadanía que comprobó hasta qué punto la protección de la vida depende de gobiernos preparados, presentes y responsables.

Proteger la tierra es proteger la vida. Este bloque habla de emergencias, reconstrucción, cambio climático, agua, agricultura, litoral, ordenación del territorio, infraestructuras y prevención. En realidad, habla de algo más profundo. Habla del derecho a vivir con seguridad. Seguridad cuando llueve de forma extrema. Seguridad cuando hay riesgo de incendio. Seguridad cuando una ola de calor amenaza a las personas en situación de vulnerabilidad. Seguridad cuando la sequía golpea al campo. Seguridad cuando una familia necesita saber que las instituciones están antes, durante y después de la emergencia.

La crisis climática ya no es una advertencia lejana. Está aquí y afecta de manera directa a la Comunitat Valenciana. Afecta a nuestras ciudades y pueblos, a nuestra agricultura, a nuestras infraestructuras, a nuestro litoral, a nuestros barrancos, a nuestros ecosistemas, a nuestra salud y a nuestra economía. Las lluvias torrenciales, las sequías, los incendios, las olas de calor, la erosión costera y los daños sobre cultivos y viviendas no pueden tratarse como episodios aislados. Forman parte de una realidad nueva que exige una política nueva.

La Comunitat Valenciana es un territorio especialmente vulnerable. Tiene una larga fachada litoral, comarcas densamente pobladas, zonas inundables, barrancos mediterráneos de respuesta rápida, presión urbanística, riesgo de incendios, fragilidad de acuíferos, estrés hídrico y una agricultura que depende del agua y del equilibrio climático. Todo eso exige prevención, ciencia, planificación, inversión pública, coordinación institucional y una cultura política que entienda que proteger no es reaccionar tarde. Proteger es anticiparse.

La DANA mostró con una crudeza insoportable la diferencia entre gobernar y ocupar el poder. Cuando una emergencia se acerca, la ciudadanía necesita avisos claros, coordinación, presencia, decisiones rápidas y una autoridad pública centrada en salvar vidas. Lo que se ha ido conociendo sobre aquella jornada ha desmontado el relato de la falta de información. Hubo avisos, informes, datos de emergencia, alertas hidrológicas, llamadas de auxilio y señales suficientes para actuar con mayor diligencia. La investigación judicial y las informaciones publicadas han revelado retrasos, contradicciones y decisiones que no pueden despacharse como simples fallos técnicos.

Lo ocurrido con las alertas resulta especialmente grave. La ciudadanía no necesitaba un gobierno preocupado por construir un relato, modular mensajes o protegerse políticamente. Necesitaba un gobierno concentrado en salvar vidas. Una alerta tardía no es un fallo menor. Una alerta tardía puede dejar a miles de personas sin la información necesaria para evitar desplazamientos, buscar zonas seguras o protegerse. En una emergencia, cada minuto cuenta y cada duda institucional puede tener consecuencias irreparables.

La ausencia no fue solo la de una persona. Lo que se ha ido conociendo apunta a un gobierno que, en el momento más grave, falló de manera colectiva. Mientras la población necesitaba instrucciones claras, presencia pública, coordinación y decisiones orientadas a proteger, demasiados esfuerzos parecieron dirigirse a gestionar el relato, preparar versiones y desplazar responsabilidades. Eso es políticamente inaceptable y moralmente insoportable. La indignación de la sociedad valenciana y, sobre todo, de las víctimas y sus familias, nace precisamente de ahí. De la sensación de que hubo información suficiente para actuar antes y de que, cuando había que estar completamente centrados en proteger a la gente, el Consell falló en lo esencial.

El cierre de la comisión de investigación en Les Corts ha agravado esa herida democrática. Después de una tragedia de esta magnitud, las instituciones no pueden protegerse a sí mismas antes que proteger la verdad. Las víctimas tienen derecho a saber qué ocurrió, quién tomó las decisiones, por qué se avisó tarde, qué falló en la coordinación, qué responsabilidades hubo y qué cambios se van a introducir para que no vuelva a ocurrir. Una democracia decente no convierte el dolor en un trámite ni la rendición de cuentas en una molestia.

La reconstrucción debe ser justa, ágil y centrada en las personas afectadas. Eso exige que las ayudas lleguen sin convertir los trámites en una segunda carga para quienes ya lo han perdido todo, que los municipios dispongan de apoyo técnico y financiero, que las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad no queden atrás y que cada decisión se tome escuchando a los territorios afectados. La coordinación entre administraciones es imprescindible, pero no puede utilizarse para repartir culpas ni eludir responsabilidades. Cada administración debe cumplir con su parte, y la Generalitat debe acompañar a los municipios, escuchar a las víctimas y garantizar que la reconstrucción no se quede en anuncios.

Reconstruir no puede significar volver exactamente al mismo punto de partida. No basta con reparar lo roto si se reconstruye con las mismas debilidades, en los mismos lugares y sin aprender de lo ocurrido. La reconstrucción debe servir para recuperar viviendas, comercios, campos, polígonos, centros educativos, instalaciones deportivas, equipamientos públicos, carreteras, puentes, redes de saneamiento y espacios comunitarios. Pero también debe servir para hacerlos más seguros, más resilientes y más preparados ante riesgos futuros.

La prevención debe ocupar el centro de la nueva etapa valenciana. Prevenir no luce tanto como inaugurar. No siempre permite una foto inmediata. Pero salva vidas, reduce daños y protege el futuro. La Comunitat Valenciana necesita mapas de riesgo actualizados, planes de emergencia revisados, sistemas de alerta eficaces, protocolos claros, formación de cargos públicos, simulacros, coordinación con ayuntamientos, información ciudadana e infraestructuras preparadas para episodios climáticos más frecuentes e intensos.

El sistema valenciano de emergencias debe ser reforzado desde una visión profesional, técnica y estable. Protección civil, servicios de bomberos, servicios sanitarios, policías locales, equipos municipales, voluntariado, fuerzas y cuerpos de seguridad, UME, servicios meteorológicos, confederaciones hidrográficas y administraciones implicadas deben trabajar con protocolos compartidos, canales de información fiables y una dirección clara. Las emergencias no se improvisan el día de la emergencia. Se preparan antes.

Los ayuntamientos deben ocupar un lugar central en esa política de prevención. Son la administración que está más cerca de la gente, la que conoce cada barranco, cada urbanización, cada camino, cada zona inundable, cada núcleo vulnerable y cada recurso disponible. Pero no pueden asumir solos una responsabilidad que exige financiación, apoyo técnico, formación y coordinación. La Generalitat debe reforzar los planes municipales de emergencia, la protección civil local, los medios comarcales y la capacidad de respuesta de los municipios.

La adaptación al cambio climático debe convertirse en una política transversal. No puede quedar encerrada en una conselleria ni en un plan ambiental. Debe estar presente en urbanismo, vivienda, infraestructuras, agricultura, agua, sanidad, educación, turismo, industria, movilidad, litoral, servicios sociales y emergencias. La Comunitat Valenciana necesita adaptar sus ciudades al calor extremo, preparar sus centros educativos y sanitarios, proteger a las personas mayores y vulnerables, reducir riesgos de inundación, mejorar la gestión forestal, reforzar la eficiencia energética y diseñar infraestructuras pensando en el clima que ya tenemos, no en el que teníamos hace décadas.

El agua debe abordarse desde la seriedad, no desde la confrontación permanente. La Comunitat Valenciana necesita agua para vivir, para producir alimentos, para sostener su agricultura, para mantener actividad económica y para garantizar equilibrio territorial. Pero esa defensa debe hacerse con rigor, diálogo, planificación, eficiencia y respeto institucional. La política del agua no puede reducirse a consignas ni a enfrentamientos estériles. Hay que defender los intereses valencianos con firmeza, pero también con propuestas reales, modernización del regadío, reutilización, desalación cuando sea necesaria, ahorro, depuración, recuperación de acuíferos, protección de humedales y cooperación entre territorios.

La agricultura valenciana está en primera línea de la crisis climática. Sequías, inundaciones, plagas, aumento de costes, competencia desigual y pérdida de rentabilidad están poniendo en riesgo explotaciones, empleo y paisaje. Proteger la tierra significa también proteger a quienes la trabajan. Quienes trabajan en la agricultura necesitan apoyo para adaptarse, innovar, ahorrar agua, acceder a precios justos, reforzar seguros agrarios, mejorar canales de comercialización y mantener vivo el territorio. Sin agricultura no hay solo menos producción. Hay más abandono, más riesgo ambiental y menos equilibrio territorial.

La gestión del territorio rural es también una política de prevención. El abandono de tierras, la pérdida de rentabilidad, el despoblamiento y la falta de gestión forestal aumentan riesgos. La agricultura de secano, los bancales, los mosaicos agrarios, la ganadería extensiva y la actividad rural viva pueden ayudar a prevenir incendios, conservar paisaje, fijar población y proteger suelo. La política climática no puede hacerse contra el mundo rural. Debe hacerse con él.

El litoral valenciano necesita una estrategia de protección y adaptación. No podemos seguir actuando como si el aumento del nivel del mar, los temporales, la erosión y la presión urbanística fueran problemas aislados. La costa es una riqueza económica, ambiental, cultural y social, pero también es un espacio vulnerable. Protegerla exige planificación, ciencia, inversión, cooperación con el Estado y los ayuntamientos, y una mirada que no sacrifique el futuro por beneficios inmediatos.

El actual Gobierno valenciano ha iniciado una contrarreforma en materia de urbanismo y ordenación del territorio, atacando la línea de flotación de la lucha contra el cambio climático. Ni siquiera la DANA parece haberle hecho reflexionar y comprender que hoy es más necesario que nunca desplegar los instrumentos de planificación territorial que hagan de nuestro territorio un espacio más protegido y menos vulnerable.

La ordenación del territorio debe dejar de ser una cuestión secundaria. La forma en que se urbaniza, se construye, se sitúan equipamientos, se autorizan actividades, se conservan cauces, se ocupan zonas inundables o se diseñan infraestructuras tiene consecuencias directas sobre la seguridad. No se puede hablar de prevención y al mismo tiempo ignorar el territorio. Una Comunitat Valenciana más segura necesita una política territorial prudente, rigurosa y compatible con el desarrollo económico.

Las infraestructuras deben pensarse desde la resiliencia. Carreteras, puentes, redes ferroviarias, saneamiento, depuración, barrancos, centros de salud, colegios, residencias, polígonos industriales y equipamientos públicos deben estar preparados para episodios climáticos más frecuentes e intensos. La inversión pública debe priorizar seguridad, adaptación y protección de la vida. No se trata solo de reparar lo que se rompe. Se trata de reducir la posibilidad de que vuelva a romperse.

La educación ambiental y la cultura de la prevención deben formar parte del proyecto de futuro. La ciudadanía necesita información, formación y confianza. Los centros educativos, las asociaciones, los municipios, los medios públicos y las instituciones pueden ayudar a construir una sociedad más preparada. Saber cómo actuar ante una emergencia, comprender los riesgos del territorio, cuidar el agua, reducir residuos, prevenir incendios o participar en redes comunitarias de apoyo son elementos de ciudadanía democrática.

El actual gobierno del PP, condicionado por Vox ha demostrado que no está a la altura de este desafío. Ha despreciado la prevención, ha debilitado la agenda climática, ha asumido marcos negacionistas de Vox y ha intentado convertir la gestión de la DANA en una batalla de relato. La protección de la vida no admite frivolidad. No se puede negar el cambio climático y luego pedir confianza ante emergencias climáticas. No se puede llegar tarde y después esconderse en excusas. No se puede cerrar en falso una investigación cuando las víctimas siguen reclamando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Ese es el contraste de fondo. Frente al negacionismo, ciencia. Frente a la improvisación, planificación. Frente a la propaganda, prevención. Frente a la ocultación, verdad. Frente al abandono, reconstrucción justa. Frente a la política que llega tarde, una política que se anticipa. La seguridad climática, territorial y ambiental debe convertirse en una de las grandes señas de identidad de la nueva etapa valenciana.

La Comunitat Valenciana necesita un gobierno que aprenda de lo ocurrido, que asuma responsabilidades, que escuche a la ciencia, que respete a las víctimas, que planifique con los municipios, que cuide el agua, que defienda el territorio y que convierta la prevención en una prioridad permanente. Proteger la tierra, proteger la vida y reconstruir la confianza deben ser objetivos inseparables.

Compromisos para proteger la vida y preparar el futuro
Nuestro compromiso con las víctimas, la verdad y la reparación

El PSPV-PSOE se compromete a situar a las víctimas de la DANA en el centro de la respuesta institucional. La verdad, la memoria, la reparación y la rendición de cuentas son condiciones básicas de una democracia digna. Las víctimas y sus familias tienen derecho a ser escuchadas, respetadas y acompañadas.

La Generalitat debe garantizar apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, acompañamiento social, memoria institucional, participación de las asociaciones de víctimas y una respuesta pública que no cierre en falso lo ocurrido. La política no puede tratar a las víctimas como una incomodidad ni convertir su dolor en un obstáculo para pasar página.

El PSPV-PSOE defenderá la reapertura de una investigación parlamentaria seria, útil y respetuosa con las víctimas. Saber qué falló es imprescindible para que no vuelva a ocurrir una catástrofe humana. La rendición de cuentas no debilita a las instituciones. Las fortalece. Nuestro compromiso es el de la reparación emocional y la recuperación de la confianza en nuestras instituciones.

Nuestro compromiso con una reconstrucción justa

El PSPV-PSOE se compromete a una reconstrucción justa, transparente y completa de las zonas afectadas por la DANA. La Generalitat debe garantizar que las ayudas lleguen con agilidad, que los trámites sean claros, que los ayuntamientos dispongan de apoyo técnico y financiero y que las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad no queden atrás.

La reconstrucción debe recuperar viviendas, comercios, campos, polígonos, centros educativos, instalaciones deportivas, infraestructuras, servicios públicos y espacios comunitarios. Pero también debe mejorar la seguridad futura de los municipios afectados. Reconstruir bien significa reparar daños, recuperar vidas y preparar mejor el territorio.

La Generalitat debe crear mecanismos de seguimiento público, con información clara sobre ayudas, obras, plazos, inversiones y grado de ejecución. La ciudadanía tiene derecho a saber qué se ha prometido, qué se ha hecho, qué falta por hacer y quién responde de cada decisión.

Nuestro compromiso con un sistema valenciano de emergencias fuerte

El PSPV-PSOE se compromete a reforzar el sistema valenciano de emergencias y protección civil. La Comunitat Valenciana necesita protocolos claros, dirección efectiva, coordinación entre administraciones, formación de cargos públicos, simulacros periódicos, equipos profesionales suficientes, canales de información fiables y mecanismos de cooperación con ayuntamientos, Estado, cuerpos de seguridad, servicios de bomberos, servicios sanitarios y voluntariado.

La Generalitat debe revisar los planes autonómicos de emergencia, actualizar mapas de riesgo, reforzar el 112, mejorar la coordinación del CECOPI, garantizar formación continua y asegurar que todas las decisiones críticas estén reguladas, practicadas y evaluadas. Las emergencias se ganan o se pierden antes de que sucedan.

La protección civil no puede depender de la improvisación ni de la voluntad de cada gobierno. Debe ser una política estable, profesional, financiada y sometida a evaluación permanente.

Nuestro compromiso con alertas rápidas y comunicación pública fiable

El PSPV-PSOE se compromete a garantizar un sistema de alertas rápido, comprensible y eficaz. La ciudadanía debe recibir información clara, útil y a tiempo cuando su vida está en riesgo. La tecnología existe, pero necesita protocolos, responsables, entrenamiento y cultura de prevención.

La Generalitat debe establecer criterios claros para activar alertas masivas, mensajes comprensibles, indicaciones concretas, coordinación con alcaldías, canales multilingües cuando sea necesario y sistemas de evaluación posterior. Una alerta no puede llegar cuando el peligro ya ha atrapado a la gente.

La comunicación de emergencia debe estar al servicio de la vida, no de la imagen de ningún gobierno. En una emergencia no se gestiona un relato. Se protege a la población.

Nuestro compromiso con los municipios y la protección civil local

El PSPV-PSOE se compromete a reforzar la protección civil local y comarcal. Los ayuntamientos deben contar con apoyo técnico, recursos económicos, formación, planes municipales actualizados, herramientas de comunicación, mapas de riesgo y coordinación permanente con la Generalitat.

La Generalitat debe recuperar y ampliar las ayudas a los planes municipales de emergencia, especialmente en municipios con riesgo de inundación, incendios, aislamiento, población en situación de vulnerabilidad o infraestructuras críticas. No puede exigirse responsabilidad local sin medios suficientes.

También debe impulsarse una red comarcal de prevención y respuesta, con personal técnico, voluntariado formado, coordinación con servicios de emergencia y capacidad de apoyo a municipios pequeños. La proximidad salva tiempo y el tiempo salva vidas.

Nuestro compromiso con la adaptación climática

El PSPV-PSOE se compromete a convertir la adaptación al cambio climático en una política transversal de la Generalitat. Vivienda, urbanismo, sanidad, educación, servicios sociales, agricultura, turismo, industria, movilidad, litoral, infraestructuras y emergencias deben incorporar criterios de adaptación climática.

La Comunitat Valenciana debe prepararse para lluvias extremas, sequías, olas de calor, incendios, erosión costera y nuevos riesgos para la salud y la seguridad. Eso exige planes contra el calor, refugios climáticos, arbolado urbano, infraestructura verde, renaturalización de espacios, eficiencia energética, protección de población en situación de vulnerabilidad y criterios climáticos en las inversiones públicas.

La adaptación climática no es una política ambiental aislada. Es una política de salud, economía, seguridad, igualdad territorial y protección de la vida.

Nuestro compromiso con el agua

El PSPV-PSOE se compromete a defender una política del agua seria, útil y alejada de la confrontación estéril. La Comunitat Valenciana debe defender con firmeza los recursos que necesita, pero debe hacerlo desde la planificación, la eficiencia, la reutilización, la modernización del regadío, la depuración, la desalación cuando sea necesaria, la protección de acuíferos y la cooperación institucional.

El agua es vida, agricultura, industria, turismo, salud, territorio y futuro. Por eso no puede utilizarse solo como bandera electoral. Hace falta un pacto valenciano del agua que combine defensa de los intereses valencianos, adaptación climática, innovación, ahorro, garantía de abastecimiento, protección ambiental y apoyo al sector primario.

La Generalitat debe recuperar una estrategia valenciana de regadíos y agua regenerada, reforzar la eficiencia energética e hidráulica, proteger humedales y masas de agua, y acompañar al sector agrario y a las comunidades de regantes en la modernización necesaria.

Nuestro compromiso con el campo, el territorio rural y la prevención de incendios

El PSPV-PSOE se compromete a proteger la agricultura, la ganadería, la pesca y el territorio rural como parte de la seguridad climática valenciana. El campo no es solo producción. Es paisaje, alimentación, empleo, cultura, equilibrio territorial y prevención ambiental.

La Generalitat debe apoyar la adaptación climática del sector primario, el relevo generacional, los seguros agrarios, la innovación, el ahorro de agua, la comercialización, la defensa frente a competencia desleal y la recuperación de infraestructuras dañadas por fenómenos extremos.

También debe impulsar una gestión activa del territorio rural, recuperando tierras abandonadas, protegiendo la agricultura de secano, apoyando la ganadería extensiva, recuperando bancales donde sea posible y creando mosaicos agroforestales que reduzcan el riesgo de incendios. Un territorio rural vivo es un territorio más seguro.

Nuestro compromiso con el litoral, la ordenación del territorio y las infraestructuras resilientes

El PSPV-PSOE se compromete a proteger el litoral valenciano y ordenar mejor el territorio. La costa debe prepararse frente a temporales, erosión, aumento del nivel del mar y presión urbanística. Las decisiones sobre suelo, vivienda, equipamientos, actividades económicas y cauces deben incorporar de manera real los mapas de riesgo y los criterios científicos.

La Generalitat debe evitar decisiones urbanísticas que aumenten la exposición al peligro, proteger zonas inundables, recuperar cauces, reforzar infraestructura verde, coordinarse con ayuntamientos y Estado, y actuar con una mirada de largo plazo. No se puede hablar de prevención y al mismo tiempo ignorar el territorio.

Las infraestructuras públicas deben diseñarse y adaptarse con criterios de resiliencia. Carreteras, puentes, ferrocarril, saneamiento, depuración, barrancos, centros educativos, centros sanitarios, residencias, polígonos industriales y equipamientos públicos deben estar preparados para episodios climáticos más intensos. Cada euro invertido en prevención ahorra sufrimiento, pérdidas y reconstrucciones posteriores.

Nuestro compromiso con la educación ambiental y la cultura de la prevención

El PSPV-PSOE se compromete a impulsar una cultura valenciana de la prevención. La ciudadanía necesita información, formación y confianza. Los centros educativos, los municipios, las asociaciones, los medios públicos, los servicios de emergencia y la administración deben ayudar a construir una sociedad más informada y preparada.

La Generalitat debe promover educación ambiental, simulacros, campañas de prevención, formación en autoprotección, información sobre riesgos locales, participación comunitaria y redes vecinales de apoyo. Saber cómo actuar ante una emergencia, cuidar el agua, prevenir incendios, reducir residuos o proteger a las personas en situación de vulnerabilidad también forma parte de la ciudadanía democrática.

La seguridad no depende solo de las instituciones, aunque las instituciones tengan la responsabilidad principal. También necesita comunidades organizadas, información fiable, redes de proximidad y confianza colectiva.

El PSPV-PSOE se compromete a construir una Comunitat Valenciana más segura, más preparada y más consciente de sus riesgos. Una Comunitat que respete a las víctimas, reconstruya con justicia, refuerce las emergencias, avise a tiempo, cuide el agua, proteja el territorio, adapte sus infraestructuras y actúe frente al cambio climático desde la ciencia y la responsabilidad.

Proteger la tierra no puede ser un lujo ni una consigna ambiental. Debe ser una política de vida orientada a prevenir, anticiparse y garantizar que nunca más una emergencia encuentre a la Comunitat Valenciana sin un gobierno plenamente concentrado en proteger a su gente.

BLOQUE 5. EDUCACIÓN, DERECHOS Y ORGULLO VALENCIANO
Educación, igualdad, cultura, lengua, derechos y autogobierno

La Comunitat Valenciana necesita recuperar una idea amplia de ciudadanía. Una ciudadanía que se construye con educación pública, igualdad entre mujeres y hombres, cultura accesible, derechos efectivos, convivencia democrática, deporte, memoria, defensa de la lengua propia, autogobierno útil y financiación justa. Este bloque no habla de asuntos separados, sino de las condiciones que permiten a una sociedad vivir con libertad real, reconocerse en lo que es y avanzar sin dejar a nadie fuera.

La educación debe ocupar un lugar central en esa nueva etapa. No hay igualdad real sin una escuela pública fuerte. No hay libertad plena si el origen familiar, el barrio, el pueblo, la renta, la lengua o las necesidades educativas condicionan las oportunidades de aprender. La educación pública no es solo un servicio. Es una de las principales garantías de igualdad, convivencia y progreso. Por eso la huelga del profesorado valenciano ha tenido una dimensión que va más allá de un conflicto laboral. Ha expresado el malestar de quienes sostienen cada día las aulas ante una Conselleria que no ha querido escuchar a tiempo, no ha negociado con seriedad y ha intentado presentar como problema a quienes defendían la calidad de la educación pública.

El Partido Popular ha cometido un error grave al intentar enfrentar al profesorado con las familias y con el conjunto de la sociedad. Las familias y el profesorado no son adversarios. Comparten una misma preocupación, que el alumnado tenga una educación pública de calidad. La actitud de Pérez Llorca y del PP ante esta crisis ha mostrado una forma de gobernar basada en el desprecio a quienes trabajan en la educación, la propaganda y la falta de diálogo real. Frente a esa actitud, la dignidad del profesorado valenciano ha demostrado que la escuela pública conserva una enorme fuerza social y que sus reivindicaciones deben convertirse en compromisos verificables.

La igualdad entre mujeres y hombres debe tener entidad propia en el proyecto valenciano. El feminismo no es una política sectorial ni una etiqueta añadida. Es una condición de democracia plena. La Comunitat Valenciana debe combatir la violencia machista, la brecha salarial, la desigual distribución de los cuidados, las dificultades de conciliación, la infrarrepresentación de las mujeres en ámbitos de poder y cualquier retroceso en derechos. Frente a quienes niegan las discriminaciones existentes o diluyen la violencia machista, el PSPV-PSOE debe defender una igualdad efectiva, transversal y presente en todas las políticas públicas.

La defensa de los derechos debe formularse desde una idea amplia, serena y firme de ciudadanía. Todas las personas deben poder vivir con dignidad, seguridad y respeto, con independencia de su origen, su lengua, su situación económica, su discapacidad, sus creencias, su orientación sexual, su identidad, su edad o su forma de vida. La diversidad no debe utilizarse como arma de confrontación. Debe abordarse desde la convivencia, los derechos y las responsabilidades compartidas. Una sociedad democrática se mide también por la forma en que protege a quienes pueden ser señalados, discriminados o excluidos.

La cultura valenciana debe ser un eje de libertad, cohesión y orgullo compartido. La Comunitat Valenciana tiene una riqueza cultural extraordinaria, hecha de música, literatura, artes escénicas, fiestas, patrimonio, creación contemporánea, cultura popular, bibliotecas, museos, archivos, sociedades musicales, editoriales, asociaciones y personas creadoras. La cultura no es un adorno. Es identidad, pensamiento crítico, economía, vida comunitaria y derecho de ciudadanía. Defenderla significa garantizar acceso en todos los territorios, apoyar a quienes crean, proteger el patrimonio común y rechazar cualquier forma de censura.

La lengua propia es el mayor elemento de identidad del pueblo valenciano y debe defenderse desde el prestigio, el afecto y la convivencia. No puede ser tratada como un problema ni como un instrumento de conflicto. Es patrimonio común, derecho ciudadano, oportunidad educativa y parte esencial de nuestra personalidad colectiva. La política lingüística debe unir, pero unir no significa abandonar. Significa garantizar que el valenciano pueda aprenderse, usarse y transmitirse con normalidad, sin imposiciones partidistas y sin convertir los centros educativos ni la vida cultural en un campo de batalla.

La memoria democrática, la calidad institucional, el autogobierno y la financiación justa completan este bloque porque los derechos necesitan instituciones limpias, recursos suficientes y capacidad política para hacerse realidad. Recordar a quienes lucharon por la libertad, proteger los lugares de memoria, garantizar transparencia, rendición de cuentas y participación, defender una financiación que permita prestar los servicios públicos en igualdad y ejercer un autogobierno valenciano útil no son debates abstractos. Son condiciones concretas para que la ciudadanía valenciana tenga los mismos derechos y oportunidades que el resto de la ciudadanía española.
El actual gobierno valenciano ha abierto una etapa de retroceso en educación, igualdad, lengua, cultura y derechos. En educación, ha despreciado al profesorado y ha intentado enfrentar a la comunidad educativa. En igualdad, ha aceptado los marcos de Vox y ha debilitado consensos democráticos que costaron muchos años construir. En lengua, ha alimentado conflictos innecesarios. En cultura, ha actuado demasiadas veces desde la sospecha o la instrumentalización. En financiación, reclama recursos, pero ha evitado comprometer un apoyo claro a una propuesta que mejoraría de manera sustancial la capacidad de la Generalitat para atender a la ciudadanía.

Ese es el contraste de fondo. La derecha habla de libertad mientras debilita las condiciones que hacen posible la libertad real. Habla de convivencia mientras utiliza lengua, memoria, igualdad y diversidad para dividir. Habla de futuro mientras desprecia a quienes educan, crean, cuidan y sostienen derechos. Frente a esa forma de gobernar, el PSPV-PSOE debe ofrecer una idea más limpia, más amplia y más valenciana de sociedad.

La Comunitat Valenciana necesita recuperar el orgullo de ser una tierra educadora, feminista, culta, activa, plural, abierta y con voz propia. Un orgullo tranquilo, inclusivo y compartido. Un orgullo que no excluye a nadie, que no convierte la identidad en frontera y que entiende la valencianía como una forma de sumar. Defender lo nuestro significa cuidar la educación pública, la igualdad, la cultura, el deporte, la lengua, los derechos, la memoria democrática, la financiación justa y el autogobierno que permite mejorar la vida de la gente.

Compromisos para una Comunitat educadora, igualitaria, libre y orgullosa
Nuestro compromiso en educación

El PSPV-PSOE se compromete a recuperar la educación pública valenciana como una gran prioridad de gobierno. Desde el inicio de la legislatura, la Generalitat impulsará un acuerdo social y presupuestario con la comunidad educativa para convertir las principales reivindicaciones del profesorado, de las familias y de los centros en una hoja de ruta de gobierno. Las reivindicaciones de quienes han defendido la escuela pública durante estos meses deben convertirse en compromisos verificables.

Ese acuerdo deberá incluir una mejora retributiva plurianual del profesorado que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y situar la dignidad profesional en el lugar que merece. Ningún sistema educativo mejora si se desprecia a quienes lo sostienen. La Generalitat debe dejar de tratar al profesorado como un problema y empezar a reconocerlo como una pieza esencial del futuro valenciano. Reconocimiento significa salario, condiciones de trabajo, estabilidad, formación, confianza profesional y respeto público.

La nueva etapa educativa debe incorporar un calendario ambicioso de reducción de ratios en todas las etapas. La Comunitat Valenciana necesita una planificación sostenida que reduzca progresivamente el número de estudiantes por aula, empezando por las etapas y centros con mayor complejidad, y aprovechando la bajada de natalidad para mejorar la calidad educativa allí donde sea posible. Cuando haya menos alumnado en un municipio, la respuesta no debe ser cerrar unidades, sino estudiar cómo utilizar esa realidad para mejorar ratios, reforzar apoyos, sostener escuelas de proximidad y ofrecer una atención más personalizada.

La reducción de ratios debe conectarse con un avance decidido hacia una verdadera educación inclusiva. Los centros necesitan más profesorado, más orientación, más especialistas de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, más apoyo al alumnado en situación de vulnerabilidad y más tiempo para coordinarse con servicios sociales y sanidad. La inclusión no puede depender del voluntarismo de los equipos docentes ni de la capacidad de cada familia para pelear cada recurso. Debe ser una obligación efectiva de la administración.

La Generalitat debe reducir de verdad la burocracia escolar y reforzar la administración de los centros. Hay que revisar normas, plataformas, memorias, planes y requerimientos que consumen tiempo docente sin mejorar el aprendizaje. La simplificación debe ser real, pactada con los equipos directivos y evaluada curso a curso. Pero reducir burocracia no significa dejar solos a los centros. Por eso, el PSPV-PSOE se compromete a dotar progresivamente a todos los colegios públicos de Infantil y Primaria de personal administrativo suficiente, empezando por los centros de mayor tamaño y complejidad, y extendiendo la medida con un calendario claro.

El PSPV-PSOE se compromete a lanzar un plan valenciano de infraestructuras educativas dignas, sostenibles y adaptadas al siglo XXI. No se puede hablar de calidad educativa mientras haya centros con problemas graves de climatización, patios inadecuados, espacios insuficientes, barracones, instalaciones deterioradas o edificios que no responden a las nuevas necesidades pedagógicas.

La Generalitat debe recuperar una planificación seria de construcción, reforma y mantenimiento de centros educativos, con transparencia, prioridades públicas y colaboración leal con los ayuntamientos. Para ello, el PSPV-PSOE retomará e impulsará el Plan Edificant como instrumento útil para agilizar las obras necesarias, desbloquear actuaciones pendientes y permitir que los ayuntamientos que quieran colaborar puedan hacerlo con garantías, financiación suficiente y seguridad administrativa.

Ese plan debe incorporar un programa urgente de climatización y adaptación climática de los centros educativos. Las olas de calor ya forman parte de la realidad educativa. La respuesta no puede ser trasladar la responsabilidad a los equipos directivos ni improvisar instrucciones cada final de curso. Los colegios e institutos deben contar con sombra, ventilación, climatización razonable, eficiencia energética, patios renaturalizados, espacios seguros y protocolos claros. Un centro educativo digno debe proteger, educar y cuidar.

Junto a estas medidas, la política educativa debe situar en primer plano el aprendizaje y la igualdad de oportunidades. La Generalitat reforzará la educación infantil de 0 a 3 años, la detección temprana de dificultades, la orientación y la tutoría, las becas y ayudas, y los programas frente al abandono escolar. También impulsará una escolarización equilibrada que evite la concentración del alumnado en situación de vulnerabilidad y garantizará apoyos suficientes para que todo el alumnado pueda aprender, progresar y desarrollar su talento.

Nuestro compromiso con el valenciano

El PSPV-PSOE se compromete a defender un modelo lingüístico basado en el prestigio, la convivencia y la igualdad de oportunidades. El valenciano no debe utilizarse como arma electoral ni como excusa para enfrentar a familias. La lengua propia debe ser protegida, enseñada y promovida desde el respeto, el afecto y la utilidad social.

La política lingüística debe garantizar que todo el alumnado pueda conocer las dos lenguas oficiales y mejorar su competencia en lenguas extranjeras, sin segregación, sin imposición partidista y sin convertir los centros en campo de batalla. La Generalitat debe trabajar con los centros, con el profesorado y con las familias para reconstruir un consenso lingüístico amplio.

Nuestro compromiso feminista

El PSPV-PSOE se compromete a hacer del feminismo una política transversal de gobierno y una seña de identidad de la nueva etapa valenciana. La agenda feminista debe volver a situarse en el centro de las políticas públicas. En este sentido la igualdad entre mujeres y hombres no puede ser un apartado decorativo ni una declaración para días señalados. Es una condición de democracia plena. Una sociedad no es libre si la mitad de su población sigue sufriendo más precariedad, más miedo, más carga de cuidados, más violencia y menos poder de decisión.

El feminismo socialista parte de una idea sencilla. La libertad debe poder ejercerse en la vida real, sin limitación alguna. No basta con reconocer formalmente los mismos derechos si después una mujer cobra menos, cuida más, promociona menos, sufre acoso o encuentra más dificultades para acceder a una vivienda, a un empleo estable, a la ciencia, a la cultura, al deporte o a los espacios de decisión. La igualdad formal fue una conquista imprescindible. La igualdad real sigue siendo una tarea política de primer orden.

Por eso, la Generalitat debe incorporar la perspectiva feminista en todas sus políticas, en educación, empleo, sanidad, cuidados, dependencia, vivienda, urbanismo, movilidad, cultura, deporte, ciencia, universidad, seguridad, justicia, presupuestos y contratación pública. Una política feminista revisa quién accede a los recursos, quién soporta las cargas, quién queda fuera de las oportunidades y qué desigualdades siguen actuando.

La primera prioridad debe ser la lucha contra la violencia machista en todas sus formas. La Comunitat Valenciana debe recuperar y reforzar el consenso social e institucional frente al negacionismo de Vox y frente a la ambigüedad de una derecha que ha aceptado demasiadas veces sus marcos. El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género deben seguir siendo referencias fundamentales para una acción pública seria, estable y dotada de recursos. La violencia contra las mujeres no es un problema privado. Es la expresión más brutal de una desigualdad estructural que la democracia debe combatir. En este sentido, la Generalitat Valenciana debe actualizar sus leyes para impulsar políticas públicas que se adapten a las nuevas realidades de las mujeres y las nuevas formas de violencia que sufrimos. Debemos legislar para impulsar la lucha contra la explotación sexual de las mujeres en todos sus ámbitos, declarando la Comunitat Valenciana abolicionista de la prostitución y trabajar en una estrategia real contra la violencia digital que se esconde detrás de las pantallas, como una nueva realidad.

El compromiso exige prevención, coeducación, atención integral a las víctimas, más recursos para la red de asistencia, formación especializada, coordinación institucional, apoyo psicológico, protección de menores y una justicia con perspectiva de género. También exige abordar la violencia vicaria, sexual, económica, digital e institucional, la trata, la explotación sexual, el acoso y el control. Ninguna víctima debe sentirse sola, cuestionada o atrapada en un laberinto administrativo. Educar en igualdad no adoctrina, libera y ayuda a prevenir la violencia machista.

El compromiso feminista debe llegar también al empleo, a la economía y a los cuidados. La desigualdad salarial, la parcialidad no deseada, la segregación ocupacional, el techo de cristal, la penalización de la maternidad y el desigual reparto de los cuidados limitan la autonomía económica de muchas mujeres. Según el Instituto de las Mujeres, con datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2023, la brecha retributiva anual se situó en el 15,74%, 4.781,18 euros menos al año para las mujeres. La Generalitat debe actuar con planes de igualdad efectivos, transparencia retributiva, cláusulas sociales, inspección y apoyo al liderazgo femenino.

Durante demasiado tiempo, la organización social ha descansado sobre el trabajo invisible o mal reconocido de las mujeres. Cuidar a menores, personas mayores, personas en situación de dependencia o familiares con una enfermedad no puede seguir siendo una carga privada que casi siempre recae sobre ellas. La política pública debe reconocer, redistribuir y dignificar los cuidados, reforzando dependencia, atención domiciliaria, escuelas infantiles, servicios sociales, corresponsabilidad, conciliación y apoyo a las familias cuidadoras.

La igualdad también debe entrar en la forma de diseñar ciudades, pueblos y servicios. El urbanismo, la movilidad y la vivienda tienen impacto de género. Una Comunitat feminista debe planificar desde la vida cotidiana, con transporte público útil, barrios seguros, iluminación, equipamientos próximos, vivienda asequible y servicios de cercanía.

El feminismo valenciano debe ser intergeneracional, territorial e inclusivo. Las políticas de igualdad deben tener en cuenta realidades distintas, jóvenes que no pueden emanciparse, mujeres mayores que viven solas, trabajadoras migrantes, mujeres con discapacidad, agricultoras, científicas precarias, madres solas, víctimas de violencia machista o mujeres de pueblos pequeños sin transporte suficiente. La igualdad debe llegar a todos los territorios.
Frente a la ofensiva reaccionaria, el PSPV-PSOE debe hablar con claridad. No vamos a aceptar que se niegue la violencia machista, que se ridiculice el feminismo, que se recorten políticas de igualdad, que se cuestione la coeducación o que se utilice la libertad como excusa para mantener privilegios. La libertad de las mujeres no amenaza a nadie. Amplía la democracia y hace más justa a la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana que queremos construir será feminista o no será plenamente democrática. Será una tierra donde las mujeres vivan sin miedo, trabajen con igualdad, cuiden sin renunciar a su propia vida, participen en las decisiones y disfruten de todos sus derechos. Ese es el compromiso del PSPV-PSOE, convertir la igualdad en una política pública financiada, evaluable y sostenida.

Nuestro compromiso con los derechos y la convivencia democrática

El PSPV-PSOE se compromete a proteger los derechos y libertades de todas las personas frente a cualquier retroceso. La Comunitat Valenciana debe ser una tierra segura para vivir con dignidad, sea cual sea el origen, la orientación sexual, la identidad, la edad, la discapacidad, la situación familiar, la lengua habitual o el lugar de residencia. La diversidad no puede tratarse como una amenaza. Es una realidad de nuestra sociedad y una condición de convivencia democrática.

La Generalitat debe impulsar políticas de igualdad de trato, prevención de los delitos de odio, apoyo a las entidades sociales, educación en convivencia, atención a las víctimas de discriminación y garantía de derechos para las personas LGTBI. La mejor respuesta frente a quienes quieren enfrentar a la ciudadanía es una política clara de derechos y deberes compartidos. Mismas reglas y mismos derechos para todas las personas y prioridad a quien más necesita apoyo, sin privilegios, sin bulos y sin discriminación.

La Comunitat Valenciana es también una sociedad diversa por origen, cultura y creencias. La Generalitat impulsará políticas de acogida, integración y convivencia intercultural, garantizará el acceso normalizado a los servicios públicos y reforzará la lucha contra el racismo, la xenofobia y los discursos de odio. La diversidad debe gestionarse desde los derechos, las responsabilidades compartidas y la participación social, evitando tanto la discriminación como la creación de comunidades separadas.

Nuestro compromiso con una Justicia cercana y accesible

Los derechos solo son plenamente efectivos cuando existen instituciones capaces de garantizarlos. Una democracia de calidad necesita una Justicia accesible, una Administración que funcione con eficacia y unos poderes públicos que actúen con transparencia. Todo ello forma parte de un mismo compromiso: evitar cualquier situación de indefensión y proteger los derechos de las personas con independencia de su situación económica o del lugar donde vivan.

El PSPV-PSOE se compromete a impulsar una Administración de Justicia más cercana, moderna y accesible. La Generalitat debe mejorar las infraestructuras judiciales, facilitar el acceso a sus servicios, reforzar la atención a las víctimas, extender la mediación y otros sistemas de resolución de conflictos, avanzar en la transformación digital y mejorar la coordinación entre los distintos servicios públicos.

Nuestro compromiso con la cultura valenciana

El PSPV-PSOE se compromete a impulsar una política cultural valenciana ambiciosa, descentralizada y libre de censura. La cultura no puede ser un adorno ni una partida secundaria. Es identidad, conocimiento, creatividad, economía, cohesión social y libertad. La Generalitat debe apoyar a quienes crean, a las industrias culturales, a las sociedades musicales, a las bibliotecas, al patrimonio, a los museos, a los archivos, al teatro, al audiovisual, a la danza, al circo, a la literatura, a las artes plásticas, a la cultura popular y a la creación contemporánea.

La nueva política cultural debe llegar a todas las comarcas. No puede concentrarse solo en unos pocos espacios ni depender de decisiones discrecionales. Debe haber circuitos culturales estables, apoyo a la programación municipal, impulso a la lectura, fortalecimiento de bibliotecas, protección del patrimonio local, colaboración con universidades y centros educativos, y una estrategia para que la cultura valenciana tenga más presencia en España, en Europa y en el Mediterráneo.

Defender la cultura valenciana significa defender a Estellés y a Miguel Hernández, a nuestras bandas de música, a nuestras fiestas, a nuestra memoria, a la creación joven valenciana y a todas las formas de expresión que hacen más libre a una sociedad.

Nuestro compromiso con el deporte y la vida activa

El PSPV-PSOE se compromete a impulsar el deporte como derecho ciudadano, como herramienta de salud, igualdad, convivencia y cohesión social. El deporte no puede quedar reducido al alto rendimiento ni a los grandes acontecimientos. Debe formar parte de la vida cotidiana de los barrios, pueblos y comarcas, con instalaciones dignas, clubes de base, deporte escolar, actividad física para todas las edades, apoyo al deporte femenino, inclusión de personas con discapacidad y colaboración estable con ayuntamientos, federaciones y entidades deportivas.

La Comunitat Valenciana necesita una política deportiva que conecte educación, salud, juventud, igualdad y vida comunitaria. Eso exige mejorar instalaciones municipales y escolares, abrir más espacios públicos para la práctica deportiva, apoyar a los clubes que sostienen el deporte de base, promover hábitos saludables desde la infancia, facilitar la práctica deportiva de las personas mayores y garantizar que nadie quede fuera por razones económicas, territoriales o de discapacidad. El deporte también construye ciudadanía, crea comunidad y ayuda a vivir mejor.

Nuestro compromiso con la memoria democrática y la calidad institucional

El PSPV-PSOE se compromete a defender una política de memoria democrática, calidad institucional y convivencia. Una democracia fuerte no se construye solo votando cada cuatro años. Necesita instituciones limpias, información veraz, participación, respeto al pluralismo, memoria, transparencia y rendición de cuentas. La Generalitat debe recuperar una política activa de memoria democrática, apoyo a las víctimas, difusión educativa, investigación, señalización de lugares de memoria y reconocimiento de quienes lucharon por la libertad.

También debe reforzarse la calidad democrática de las instituciones valencianas. Eso exige transparencia real en contratación, subvenciones, listas de espera, adjudicaciones, ayudas públicas, vivienda protegida y uso de fondos. La ciudadanía tiene derecho a saber qué se decide, por qué se decide y a quién beneficia. La desconfianza no se combate con propaganda. Se combate con limpieza, datos claros, participación y cumplimiento de la palabra dada.

Nuestro compromiso con una nueva manera de entender la política

La transformación de la Comunitat Valenciana no dependerá solo de las decisiones de un gobierno. Necesita instituciones eficaces, una ciudadanía activa, una sociedad civil fuerte y organizaciones políticas capaces de escuchar, explicar, dialogar, rendir cuentas e incorporar aportaciones de manera permanente.

Frente a la confrontación permanente y la comunicación limitada a los periodos electorales, el PSPV-PSOE reivindica una política cercana, constante y útil, arraigada en pueblos, barrios, ciudades y comarcas. Los partidos refuerzan su legitimidad cuando conocen los problemas antes de que se conviertan en conflictos y trabajan con la inteligencia social de asociaciones, sindicatos, cooperativas, colegios profesionales, universidades, empresas y colectivos ciudadanos.

La confianza se construye con una buena gestión, pero también con coherencia, transparencia, proximidad y presencia continuada en el territorio. Así entendemos el socialismo democrático: una fuerza abierta y arraigada que trabaja cada día con la sociedad para construir una Comunitat Valenciana más justa, cohesionada y participativa.

El PSPV-PSOE impulsará mecanismos estables de diálogo con la sociedad civil, procesos participativos útiles y la participación de la ciudadanía en la elaboración y evaluación de las políticas públicas. La participación no sustituye a la representación democrática; la mejora y refuerza su legitimidad.

Nuestro compromiso con una financiación justa

El PSPV-PSOE se compromete a luchar por un nuevo modelo de financiación que garantice más recursos y más igualdad para la Comunitat Valenciana. Defendemos una reforma que corrija la infrafinanciación histórica. Según las estimaciones del Gobierno de España, la propuesta presentada aportaría en 2027, si se aprueba, alrededor de 3.669 millones de euros adicionales respecto al sistema vigente. Esos recursos deben traducirse en derechos concretos: mejor sanidad, educación y dependencia, más vivienda, transporte, cultura, servicios sociales e infraestructuras, y más capacidad para responder a las necesidades de los municipios y las comarcas.

La financiación justa debe explicarse desde la vida de la gente. No es una disputa entre administraciones ni una batalla de siglas. Es la condición para que la ciudadanía valenciana tenga los mismos derechos que el resto de la ciudadanía española. El PSPV-PSOE defenderá ese objetivo con firmeza, lealtad institucional y voluntad de acuerdo. Ante cualquier propuesta que mejore de manera sustancial los recursos de la Comunitat Valenciana, la obligación del gobierno valenciano es negociar, proponer mejoras y contribuir a alcanzar un acuerdo justo.

La reforma del sistema debe completarse con un tratamiento justo de la deuda acumulada como consecuencia de años de infrafinanciación y con un fondo de nivelación transitorio hasta la entrada en vigor del nuevo modelo. La Comunitat Valenciana no puede seguir financiando servicios públicos esenciales mediante más endeudamiento por recibir menos recursos de los que le corresponden.

Nuestro compromiso con el autogobierno valenciano

El PSPV-PSOE se compromete a reforzar el autogobierno valenciano como herramienta útil para la ciudadanía. El autogobierno no es una bandera vacía. Sirve para ordenar mejor el territorio, defender sectores productivos, proteger la lengua y la cultura, planificar servicios públicos, impulsar vivienda, mejorar transporte, apoyar a los municipios y responder con más proximidad a los problemas reales. La Comunitat Valenciana necesita más capacidad política, más recursos y más voz propia en España y en Europa.

El desarrollo pleno del autogobierno exige culminar reivindicaciones históricas ampliamente compartidas, como la recuperación de la capacidad para legislar en materia de Derecho Civil Valenciano. El PSPV-PSOE defenderá el acuerdo político e institucional y la reforma constitucional que permitan restituir, con plena seguridad jurídica, una competencia recogida en nuestro Estatut d'Autonomia y respaldada por un amplio consenso social, académico y jurídico. Recuperarla permitirá adaptar nuestro ordenamiento a la realidad valenciana y responder con mayor proximidad a las necesidades de la ciudadanía.

Ese autogobierno debe ejercerse desde un valencianismo abierto, inclusivo y exigente. Abierto porque no excluye a nadie. Inclusivo porque reconoce la pluralidad de esta tierra. Exigente porque defiende los intereses valencianos sin subordinarlos a ninguna estrategia partidista. La nueva etapa debe unir financiación justa, derecho civil valenciano, cultura, lengua, comarcas, municipalismo, presencia europea y defensa de los sectores valencianos. Queremos una Comunitat Valenciana que no se conforme con pedir permiso, sino que aporte, lidere y defienda con orgullo lo que le corresponde.

El PSPV-PSOE se compromete a construir una Comunitat educadora, feminista, culta, activa, plural, libre y justamente financiada. Una Comunitat donde la educación sea libertad real, las mujeres vivan sin miedo y con plena igualdad, la cultura no sea censurada ni arrinconada, el deporte ayude a vivir mejor y a crear comunidad, el valenciano sea prestigio y convivencia, todas las personas tengan derechos, la memoria democrática sea respeto y el autogobierno sirva para mejorar la vida de la ciudadanía. Defender estos derechos exige convertirlos en políticas públicas reconocibles, financiadas, evaluables y sostenidas en el tiempo.